



© Luis Acosta/AFP

ELECCIONES 2021:

EL SISTEMA POLÍTICO HONDUREÑO Y LAS LUCHAS DE LAS MUJERES POR SUS DERECHOS POLÍTICOS

**Por: María Elena Méndez, Delmy Martínez,
Laura Carlsen**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. SISTEMA POLÍTICO HONDUREÑO	3
2.1. Las características del sistema político en el siglo XX	
3. RETORNO AL SISTEMA DEMOCRÁTICO, BIPARTIDISMO Y LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES HONDUREÑAS.....	4
3.1. Transición al sistema democrático y el bipartidismo (a partir de la década de los 80s)	
3.2. El Golpe de Estado y la reconfiguración del sistema político en Honduras	
4. MUCHOS SIGLOS DE DISCRIMINACIÓN A SESENTA Y SIETE AÑOS DE HABER ALCANZADO EL SUFRAGIO FEMENINO.....	11
4.1. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres hondureñas	
4.2. ¿Cómo les fue a las mujeres que optan a cargos populares en las elecciones generales?	
4.2.1. Resultados de las elecciones generales del 2021 y la representación de las mujeres en los cargos de elección popular	
4.2.2. Características votantes	
4.3. Reflexiones teóricas del poder desde la mirada feminista	
5. VIOLENCIA POLÍTICA.....	27
6. AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES.....	29
6.1. Avances en políticas públicas y leyes para la participación política de las mujeres hondureñas	
6.2. Desafíos de la participación política de las mujeres hondureñas de cara a las próximas elecciones	
7. PLAN DE GOBIERNO DE XIOMARA Y LA AGENDA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISTAS.....	33
7.1. La visión de refundación del país y los problemas estructurales que aborda el plan de gobierno	
7.2. Los diálogos y los vasos vinculantes entre organizaciones de mujeres y feministas y el nuevo gobierno	

8. EL ENTORNO INTERNACIONAL.....	36
8.1. El papel del gobierno de los Estados Unidos	
8.2. Solidaridad internacional	
9. Las oportunidades.....	43
10. Bibliografía.....	47

1. INTRODUCCIÓN

Este informe es un aporte para reflexionar cómo el sistema político hondureño, ha mantenido por siglos excluidas a las mujeres hondureñas de los espacios del poder político, a pesar de haber conquistado los derechos políticos y civiles 1955; sin duda que el reconocimiento de los derechos políticos, rompió los paradigmas del pensamiento occidental hegemónico excluyente, de acentuar el poder masculino en la esfera de lo público, donde se ejerce la política y a las mujeres confinadas al ámbito doméstico.

El pensamiento político feminista rompe con esa dicotomía, aporta a la teoría política mediante el proceso de desconstrucción de ser pensadas las mujeres como “seres naturales” movidas por emociones e instintos, sin pensamiento, creatividad y razón. Estos estereotipos sexistas se han mantenido por siglos en los pensamientos y sentimientos de la humanidad, mediante discursos, representaciones y calificativos que históricamente y culturalmente han visto ajenas a las mujeres a la labor política, desempeñando funciones en lo público que son extensión de su trabajo reproductivo como: arreglo de locales, motivar a la población para el ejercicio del sufragio, preparación logística para las movilizaciones políticas, levantar censo de los simpatizantes de los partidos políticos, etc. Todas estas actividades cumplen la función de asistir en la acción política de la labor masculina; con el trabajo logístico de las mujeres legitima su poder y control sobre las mujeres que no son consideradas seres políticos y otros hombres, como los esclavizados por razones de conquista y colonización.

El pensamiento feminista en cuanto al proyecto emancipador irrumpió e interpeló los esquemas ortodoxos jerarquizados y naturalizados, al separar a las mujeres de la función política asignándoselas a los hombres, quienes ostentan privilegios al mantener el control en la toma de decisiones en los diferentes niveles de los poderes de la nación. Uno de las herramientas teóricas y políticas del feminismo en politizar lo privado para que las mujeres se apropiaran de la política en sus pensamientos y sentimientos y se pensaran y actuaran como sujetas políticas en el ámbito público. Por ello, las feministas hondureñas desde hace más de tres décadas han impulsado y aportado conocimientos y acciones afirmativas, para garantizar la promoción, defensa y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres hondureñas al ser tema de sus agendas políticas incorporando propuestas y demandas a las instituciones y órganos electorales, para que sean gestores de los derechos políticos en condiciones de igualdad y no discriminación. Esto implica incluir la violencia política contra las mujeres al afectar el goce y ejercicio pleno de esos derechos.

A pesar de los avances de las políticas públicas, normativas legales con acciones afirmativas, para impulsar la igualdad de oportunidades de las mujeres en relación con los hombres en los cargos de elección popular, aún se enfrentan desafíos para que las mujeres logren con plenitud el ejercicio de sus derechos políticos en los diferentes poderes del Estado y contribuyen al fortalecimiento de la de-

mocracia y el acceso a la justicia sin ningún tipo de discriminación por razones de: condición social, raza, edad, género, orientación e identidad sexual.

El aporte de este ensayo recoge desde las experiencias de algunas mujeres políticas los desafíos y oportunidades que se visoran en el contexto nacional y regional, al producirse cambios en el sistema político hondureño a favor de la igualdad y equidad de las mujeres y al dirigir la conducción de la nación una mujer como presidenta de la República Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, comprometida con las propuestas y demandas de la agenda política de las mujeres; y con diputadas en el Congreso Nacional de la República, que se han apropiado no solo del discurso feminista, sino que han demostrado compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres al apoyar e impulsar decreto y leyes a favor de la equidad de género.

El informe está estructurado en nueve capítulos; el capítulo uno, corresponde a la introducción donde se explica la naturaleza del informe, los propósitos y el aporte del pensamiento feminista en desmontar paradigmas ortodoxos que excluyen a las mujeres del ejercicio de la política. El capítulo dos, desarrolla el sistema político hondureño donde se demuestra el control de los hombres en los espacios del poder de la nación. El capítulo tres, hace un análisis del retorno al sistema democrático, el control del bipartidismo en los poderes del Estado en los sistemas electorales y la exclusión de las mujeres hondureñas en la esfera de la política. El capítulo cuatro, desarrolla los aportes de los movimientos feminista para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y los avances en políticas públicas, leyes y normativas en el marco de las convenciones y tratados internacionales donde el Estado hondureño es Parte. El capítulo cinco, la violencia política de las mujeres como una de las principales violaciones a sus derechos humanos. El capítulo seis, muestra los avances y desafíos para la promoción y protección de los derechos políticos de las mujeres hondureñas. El capítulo siete, muestra el plan de gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya y las propuestas y demandas de la agenda política del movimiento de mujeres y feministas. El capítulo ocho, la solidaridad internacional en los conflictos políticos que ha enfrentado la sociedad hondureña, por el papel que ha jugado Estado Unidos en el control de la política exterior y la solidaridad de los pueblos y organizaciones de los movimientos sociales, en las violaciones de los derechos humanos de las y los luchadores sociales y de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Y el capítulo nueve, plantea las oportunidades, para el avance en el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres hondureñas.

2. SISTEMA POLÍTICO HONDUREÑO

Este capítulo ilustra las características del sistema político hondureño, como espacio de poder conducido por las fuerzas políticas que representan las élites oligarcas bajo el bipartidismo (Partido Liberal y Partido Nacional). En este periodo se crearon las bases institucionales de los sistemas electorales durante el Siglo XX-XXI. Y el papel del gobierno de los Estados Unidos en la historia política de Honduras.

2.1 Las características del sistema político en el siglo XX

En el sistema político hondureño, ha predominado como una de las características el sistema de partidos marcadamente bipartidista. Desde hace dos siglos; Partido Liberal (1890) y el Partido Nacional (1892) han alternado en el poder. En la historia política de Honduras, la presidencia de la república ha pasado entre los liderazgos de estos partidos políticos Nacional y Liberal; del Partido Liberal, José Ángel Zúñiga Huete, Juan Manuel Arias, Ramón Villeda Morales, Carlos Roberto Reina, José Simón Azcona; y en el Partido Nacional Manuel Bonilla, Tiburcio Carias Andino, Miguel Paz Barahona, Juan Manuel Gálvez y Ramón Ernesto Cruz, entre otros.

En el siglo XIX el bipartidismo “se caracterizaba por el poder concentrado en un caudillo hombre con poder absoluto, poseedor de la verdad con prácticas autoritarias y decisiones verticales, disputándose el poder político de la nación, estableciendo estructuras organizativas integradas por súbditos obedientes a la autoridad política.” (Gerencia, 2015) Según la historia política de Honduras, los líderes de los partidos políticos del bipartidismo fueron los que construyeron las reglas y los elementos de los sistemas electorales definiendo los fundamentos de los que debería ser la ciudadana y el ciudadano, como: ¿Quién puede votar? ¿Cómo pueden votar? ¿Qué puestos eligen? ¿Qué partidos pueden participar? ¿Quién lo financia? y aspectos de carácter técnico y político.

En el XIX las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ni siquiera seres humanos con razón y pensamiento para participar en lo público/político. “La categoría de sujeto político garantiza al hombre (de descendencia europea) su dominio en el ámbito de la política, de lo público y legítimo su poder, pues para el pensamiento hegemónico burgués liberal, es el sujeto quien tiene la razón, la autoridad, el dominio y el control sobre los sujetos que no son políticos, que somos las mujeres y otros hombres como los esclavizados por los procesos de conquista y colonización. La política se centra en el poder masculino asignándole la función pública/política y las mujeres son confinadas al ámbito doméstico. Y las funciones asignadas en la política están relacionadas con sus roles tradicionales”. (Constitucionales, 2011)

Durante más de un siglo los líderes del bipartidismo Partido Liberal y Partido Nacional, fueron los que se alternaban en el poder, mediante una lucha electoral con reglas y procedimientos estableci-

dos que compone el sistema electoral que caracteriza la competencia bipartidaria. Uno de los rasgos de los líderes de los partidos políticos es su pertenencia a la aristocracia de la clase oligarca, con el aval de los intereses hegemónicos norteamericanos. Las mujeres estaban excluidas de los pactos patriarcales al no tener al principio del siglo XX la categoría de ciudadanía, hasta ser aprobado el decreto número 30 del 24 de enero de 1955 en la Cámara Legislativa el derecho a la mujer hondureña en ejercer el sufragio.

3. EL RETORNO A LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS, EL BIPARTIDISMO Y LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES HONDUREÑAS

Este tercer capítulo, hace una radiografía de la transición del sistema democrático en Honduras, los cambios económicos políticos y culturales que se presentaron en la época de los 80s y 90s, tomando en cuenta el contexto regional especialmente los países del Triángulo Norte, donde se produjeron cambios en los modelos políticos y económicos, impulsando programas de ajustes estructural. En lo político el bipartidismo (PL y PN) mantuvo el control del sistema político y las mujeres hondureñas estuvieron excluidas de los pactos patriarcales, que celebraron los líderes caudillos; en el nuevo pacto político (1982). Y también se contextualiza el golpe de Estado de junio del 2009, las fuerzas políticas que intervinieron y cuales fueron los cambios que se produjeron en los procesos electorales con la incorporación del Partido Libre y la participación de las mujeres hondureñas en los cargos de elección popular.

3.1. Transición al sistema democrático y el bipartidismo (a partir de la década de los 80s)

En la década de los 80 Honduras fue uno de los países que retornó a sistemas democráticos después de dictaduras militares que profundizaron estilos autoritarios de manejo de poder político y fracturas a la Constitución del Estado de Derecho al concentrarse el poder en las cúpulas de los jerarcas militares. Mediante el golpe de Estado al presidente Constitucional Ramón Villeda Morales ocupó la presidencia de la República el general Oswaldo López Arellano (1963-1971; 1972-1974). En 1975 se le dio un golpe de Estado ocupando la presidencia Juan Alberto Melgar Castro. Después se restauró el orden constitucional mediante elecciones generales resultando electo el Abg. Ramón Ernesto Cruz del Partido Nacional.

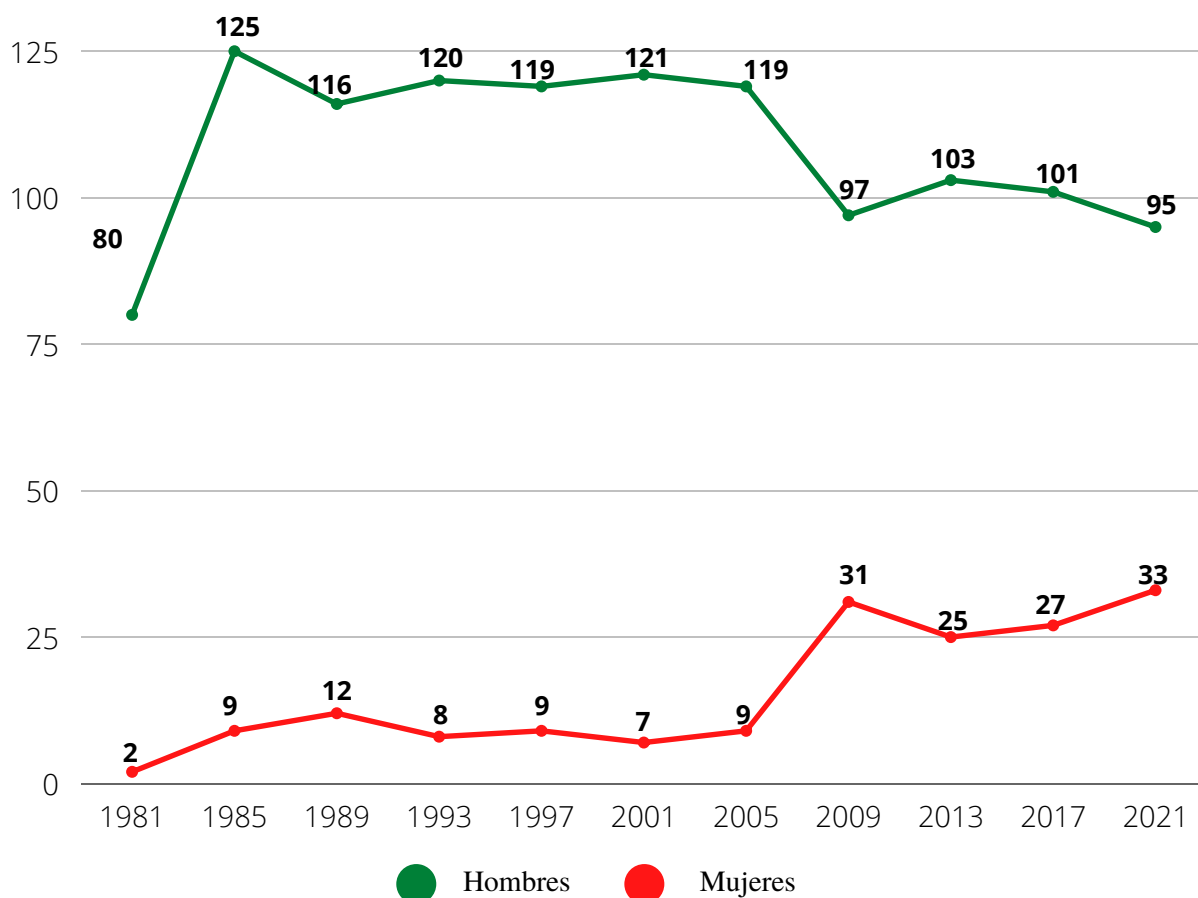
Con el retorno a la democracia en la década de los 80s, “se impulsan un complejo de procesos de cambios políticos en la región; con la particularidad que en los países del Triángulo Norte conformado por Salvador y Nicaragua se instaló la democracia antes de la paz. No fueron democracias surgidas desde abajo” efecto de reclamos populares movilizadas desde la opresión sino, decisiones de una cúpula fraccionada y en crisis. La democracia no fue el resultado de la derrota de los militares por la guerrilla. Fue un arreglo contrainsurgente. Por ello, la democratiza-

ción no fue una transición sino de pactos entre fracciones de la élite empresarial, militar y política, guiados por las iniciativas norteamericanas.” (Stiftung, 2016) Los procesos electorales que comenzaron en la década de los 80s estuvieron determinados por los diferentes intereses de las élites económicas y políticas que se posicionaron con poder en los diferentes niveles de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Y es en estos escenarios donde se determinan las reglas de juego del sistema electoral. Desde 1955 que se creó el Tribunal Supremo Electoral, lo han integrado líderes políticos hombres del bipartidismo; fueron los que establecieron los procedimientos administrativos, técnicos y políticos desde cómo elegir los cargos de elección popular y la organización de los procesos electorales para las elecciones generales.

Los análisis políticos de la transición del país destacan que el retorno a la democracia se da en un clima de guerra abierta que vivían los países de la región centroamericana (Salvador, Nicaragua y Guatemala), después de las dictaduras militares como el caso de Honduras, prevaleciendo la conflictividad social y política altamente violenta debido a la represión que enfrentaron los movimientos sociales que exigían cambios sustanciales en los procesos de reforma agraria, el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores y el cumplimiento de las demandas de los movimientos estudiantiles. Por eso, el proceso de transición culminó en 1980 en Honduras con un Nuevo Pacto Social, concentrando el poder en el sistema políticos del bipartidismo. Son los líderes de ambos partidos los que construyen y definen la institucionalidad y las reglas del juego del sistema electoral, reafirmandose los dirigentes políticos en las diferentes estructuras del poder.

Según la investigación de Marvin Barahona, desde la transición de 1982 el espacio político presenta una elevada concentración de poder en los Partidos Liberal y Nacional. El bipartidismo ha sido, en los hechos, un duopolio, que ha sometido a su arbitrio a los demás partidos. Otra de sus características es una escala a través de la cual se concentra una institucionalidad política en varios niveles, que se diferencian por la función que cumplen en la administración y sostenimiento del poder a escala nacional, regional y local. Por esta vía las élites económicas y políticas monopolizan el control de los espacios de poder en todos los niveles. En las elecciones generales que se llevaron a cabo entre 1989-2013, los Partidos Nacional y Liberal acapararon el 94.7% de los diputados propietarios de reelectos, ante un insignificante 5.3% de otros partidos, demostrando con este hallazgo, el poder absoluto del bipartidismo que constituye una alianza hegemónica en la conducción de los tres poderes del Estado. (Barahona, 2018)

**Gráfico N° 1 Representación por género en el Congreso Nacional.
Diputados/as propietarias 1981-2021**



Fuente: La representación política de las mujeres en Honduras: resistencias partidistas y propuestas de reformas inclusivas en perspectiva comparada (2021)

El gráfico demuestra que en las elecciones de 1989 fueron electas 12 diputadas 9.4% y 116 el 90% hombres. En los subsiguientes procesos electorales desde 1993 al 2005 sucedió un decrecimiento de la representación de mujeres diputadas en el Congreso. Es dos periodos electorales donde resulta un crecimiento cuantitativo de mujeres diputadas electas en las elecciones del 2009 (31 el 24.2%) y 2021 (33 el 26%). Estos hallazgos invitan a hacer un análisis más exhaustivo de los factores impulsores sociopolíticos para aumentar el número de diputadas mujeres en el Congreso.

Cuadro N° 1 Alcaldías por género 2005-2021

	2001	2005	2009	2013	2017	2021
Hombres	268	274	281	279	275	281
(%)	90.5	91.9	94.3	93.6	92.3	94.3
Mujeres	28	24	17	19	23	17
(%)	9.5	8.1	5.7	6.4	7.7	5.7

Fuente: Análisis de los resultados de las elecciones generales 2021, en Honduras. (CESPAD)

En las últimas seis elecciones generales, en las del 2021, la representación de las mujeres para ocupar los cargos de alcaldesas es mínima, en la elección de alcaldes hombres, por lo que los poderes locales prevalecen el sistema bipartidista. Hasta ahora la mayor elección de mujeres como alcaldesas se observa en el 2001, 28 alcaldías dirigidas por mujeres el 9.5% seguido 2005 24 alcaldesas el 8.1% y el 2017 23 el 7.7%. A pesar, que las mujeres en los espacios locales participan mayormente en la organización de las campañas electorales, mesas receptoras y las actividades logísticas que demandan las elecciones generales; están subrepresentadas en los gobiernos municipales implicando una limitante para implementar políticas públicas que promuevan y defiendan los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

3.2. El golpe de Estado y la reconfiguración del sistema político hondureño

El golpe de Estado al Presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, significó un retroceso en la institucionalidad democrática del país, que produjo cambios en las élites económicas del país con la profundización “del modelo neoliberal”, satisfaciendo los intereses de acumulación de capitales del sistema económico transnacional que han tenido gran capacidad para adaptarse, renovarse y reposicionarse frente a los grandes cambios del capitalismo mundial, mediante su diversificación, integración y, lo que es de mayor importancia, encadenándose hacia el sector financiero o bien posicionándose en el impulso de nuevos ejes de acumulación. En efecto, la importancia del capital transnacional se ha profundizado en todos los países del Triángulo Norte en las últimas décadas.

La reconfiguración de las élites económicas ha sido determinante en los cambios en la estructura de administración del Estado, en el rediseño del Estado hondureño y en la definición de los sistemas electorales. Estos cambios tienen una orientación políticamente conservadora que está motivada por la necesidad de adecuar al Estado al proyecto económico neoliberal impulsado por la élite históricamente dominante y al proyecto reeleccionista del presidente de la República Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. Hasta el momento este proyecto reeleccionista es funcional a los intereses de las elites económicas.” (Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, 2015)

A partir del golpe de Estado se da una mayor profundización de la captura del Estado por parte de las élites empresariales militares, políticos, religiosos y empresarios de los medios de comunicación, que avalan la concentración del poder en el Ejecutivo, debilitándose el Estado de Derecho al no existir una autonomía en los demás poderes del Estado Legislativo y Ejecutivo. Fueron desmantelados muchos de los avances contemplados en la Constitución de la República en 1982 de mantener la institucionalidad de los órganos electorales, que permitiera eliminar la desconfianza y el descontento de los procesos y resultados electorales de caracterizarse como fraudulentos por la falta de transparencia en las contiendas electorales “al sobrar acusaciones de inflación de votos en la planillas en los cargos de elección popular, venta de credenciales, financiamiento de la propaganda de a los candidatos de elección popular, más las irregularidades en el sistema de transmisión de los resultados electorales” (TRE). (Barrios, 2021)

Los tres procesos electorales entre 2009 y 2021 marcan una dinámica política de violencia, confrontación, y boicot que tiene como propósito garantizar la continuidad del proyecto político, económico neoliberal en su fase extractivista más deshumanizada que impulsaron y mantuvieron los dos presidentes electos del Partido Nacional (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández). No es casual que en las elecciones en el 2013 se denuncia un gigantesco fraude electoral dirigido por los miembros del Tribunal Supremo Electoral que mantenía el control el bipartidismo, mediante la integración de tres representantes-- dos de los partidos tradicionales (PN y PL) y otro del Partido de Democracia Cristiana-- que se adapta a las posiciones de los dos partidos tradicionales. En las elecciones del 2017 prevaleció un clima de confrontación política al producirse la reelección inconstitucional del continuismo de Juan Orlando Hernández, quien salió electo como presidente de la República en el 2014. En el año 2011 se constituye legal y legítimamente el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y se coloca como una fuerza política de oposición. El partido LIBRE surge en el movimiento de resistencia popular por la indignación masiva del pueblo hondureño al producirse el golpe de Estado en junio del 2009 al presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales, siendo derrotado y expulsado a la ciudad de San José, Costa Rica.

Los procesos de negociación política para el retorno al país del Presidente Zelaya, sucedieron mediante la presión internacional y la fuerza popular, y culminaron con el Acuerdo de Cartagena

(mayo de 2011) siendo uno de los compromisos del Estado hondureño aprobar la constitución del Partido Libertad y Refundación. El surgimiento de este partido político cambió la correlación de fuerzas del sistema político hondureño, al incorporarse una fuerza política con respaldo popular de la sociedad hondureña. la contienda electoral para optar a los cargos de elección popular se volvió competitiva al postularse líderes y lideresas con trayectoria política de su participación en el Partido Liberal y líderes y lideresas de los movimientos sociales. Es así, que en la contienda electoral del 2013 el Partido Libertad y Refundación lanza a Xiomara Castro de Zelaya, como candidata a la Presidencia de la República, con un liderazgo reconocido de acompañar los procesos de resistencia popular desde el 2009. Además, de ser la pareja del expresidente de la República José Manuel Zelaya Rosales, que en su mandato se desempeñó con la figura de primera dama, impulsando políticas sociales de compensación social como: los programas de la Red Solidaria, Merienda Escolar, entre otros.

Las elecciones generales del 2017 se caracterizaron por denuncias sistemáticas de irregularidades que han venido sucediendo desde la apertura a los sistemas democráticos agudizándose por una dictadura civil y militar, que instaló un autoritarismo, violencia y control absoluto de los órganos electorales, al estar representados en el Tribunal Supremo Electoral los partidos políticos del bipartidismo (PN, PL y la Democracia Cristiana), quienes definieron las reglas de juego de los procesos electorales. Por otro lado, los partidos políticos firmaron un pacto en el 2013 denominado Compromiso de Garantías Mínimas para la Ética y la Transparencia Electoral, que orientarían los subsiguientes procesos electorales, “siendo 1) Desarrollar una campaña política basada en el debate que responda a las necesidades y expectativas de los electores, al respeto de las organizaciones políticas y a la dignidad de los(as) candidatos(as). Se rechazará la promoción de toda forma de odio, violencia verbal o física, antes, durante y después de las elecciones. 3) Evitar el uso de los recursos públicos a nivel nacional, departamental o local, a favor o en contra de cualquier organización política o candidato. 4) Cumplir con la obligación de transparencia y rendición de cuentas sobre la procedencia y uso de los fondos públicos y privados. 5) Proponer personal idóneo, en términos técnicos y éticos, para integrar las Mesas Electorales Receptoras (MER). 6) Garantizar un hacer más eficiente y transparente el sistema de transmisión.” (Políticos, 2013)

Al revisar los episodios sucedidos en las elecciones del 2017 donde los candidatos presidenciales instalaron campañas de confrontación y de odio divulgando mensajes en los medios de comunicación, televisivos, radiales y redes sociales. El Instituto de Acceso a la Información Pública no logró obtener información de la fuente de financiamiento de los cargos de elección popular. Y algunas candidatas(os) a elección popular impugnaron actas de alteración en el conteo de los votos. La tardanza del órgano electoral para informar sobre los resultados electorales una vez cerradas las urnas, generando mayor sospecha y escándalo de fraude. (Mundo, 2017)

Los organismos internacionales que fueron veedores de las elecciones generales del 2017 como las de Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los Observadores Nacionales, llegaron a la conclusión de que Honduras urgía de reformas políticas electorales profundas. Y, además, la OEA reconoció las debilidades técnicas e institucionales del proceso electoral señalando la necesidad de repetir el proceso electoral y después avaló la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. Entre los temas claves objeto de reforma se citan: revisar y resolver el tema de la reelección presidencial, la instauración de la segunda vuelta electoral, la constitución de organismos electorales independientes, la regulación de las campañas en los medios de comunicación, la transparencia en el financiamiento político de las campañas y la separación del control de las mesas electorales receptoras (MER) por parte de los partidos políticos.” (Democracia, 2021) Todas estas reformas políticas exigían una nueva Ley Electoral.

El cambio en la correlación de fuerzas políticas con la legalidad y legitimidad del Partido Libertad y Refundación marcó un proceso de oposición permanente a los actos de impunidad, corrupción, violaciones a los derechos humanos y el poder absoluto autoritario concentrado en el Ejecutivo. Al estar concentradas las decisiones del sistema electoral en el bipartidismo (Nacional y Liberal), surge la demanda de la incorporación de un representante del Partido Libre al Consejo Nacional Electoral, creado en el 2018, y en el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas.

Después de un largo proceso de confrontación e insurrección en la Cámara Legislativa por los diputados del Partido Libertad y Refundación, en las negociaciones lograron una representación del Partido Libre en las tres instituciones del sistema electoral. También logran acuerdos para hacer reformas constitucionales y una nueva Ley Electoral de las Organizaciones Políticas. Según el balance de expertos en temas electorales y analistas políticos e investigaciones “estas reformas electorales no fueron profundas, se centraron principalmente, en la operativa electoral entre ellas el procedimiento para organizar e implementar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales”. (Democracia, 2021)

El Partido Libertad y Refundación propone a la Abg. Rixi Romana Moncada como su representante en el Consejo Nacional Electoral, el Partido Liberal a la Abg. Ana Paola Hall y del Partido Nacional Kelvin Fabricio Aguirre. La integración de dos mujeres en este órgano electoral causó un cambio cultural del reconocimiento de la capacidad política de las mujeres para participar en la toma de decisiones a su más alto nivel de la conducción política del país.

En la integración del nuevo Consejo Electoral en el 2018 le corresponde enfrentar contrapeso, disputas entre los partidos políticos, siendo las concejalas mujeres que constantemente enfrentan por los líderes hombres del Partido Nacional y Partido Liberal, manifestaciones de actos de descalificación, incapacidad y de acusaciones, marcadas por estereotipos sexistas como: que sus de-

cisiones se fundamentan en caprichos, llaman al orden en primer lugar a las Concejalas Moncada y Hall que abandonen sus emociones, etc. Estas descalificaciones hacia las concejalas mujeres por los líderes hombres se hacen de manera malintencionada y perversa al no reconocer la formación, expertise y las capacidades de las mujeres concejalas y su desempeño en este órgano electoral.

Además, no se reconocen que los problemas estructurales, técnicos y políticos, que enfrentan los órganos electorales, obedecen a los permanentes bloqueos y manipulación del poder ejecutivo, incursionando en las funciones que le compete al Congreso Nacional y la autonomía que goza el Consejo Nacional Electoral y la ampliación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral para la compra de tecnología y la contratación de la empresa que organizaría la transmisión de elecciones electorales; la depuración del censo electoral por las situaciones de inconsistencia del padrón electoral. “El partido de gobierno (PN) a través del Congreso Nacional intenta prohibir a las concejalas la difusión de los resultados preliminares de los escrutinios de las elecciones generales, asignándole a la presidencia de este órgano que corresponde a Kelvin Fabricio Aguirre del PN. Obstaculizando el trabajo con hechos como La integración tardía del Consejo Nacional Electoral, los retrasos en el cumplimiento del cronograma electoral para la celebración de las elecciones generales, que comprende el inicio del periodo de exhibición del listado preliminar de electores para que el ciudadano pueda verificar sus datos; lo tardío del sorteo para definir, en la papeleta electoral la ubicación de los partidos políticos, candidatura independientes y alianzas; adjudicación del sistema de transmisión de resultados preliminar cuatro meses antes de realización del proceso electoral. Y lo más grave es la no aprobación de una Ley Procesal Electoral que regulará las competencias específicas, entre ellas, la organización y el funcionamiento del Tribunal”. (CESPAD, 2021)

Los procesos electorales en estos 12 años que marcan la vida política del país se caracterizan por la falta de transparencia, y la existencia de instituciones no fortalecidas y que aún siguen controladas por los intereses de los partidos políticos y de las élites económicas. Además, se reproduce las desigualdades y exclusión de las mujeres de participar en igualdad de condiciones que los hombres en los cargos de elección popular a pesar de la aprobación de políticas públicas y acciones positivas, que garanticen condiciones objetivas y subjetivas en potenciar a las mujeres en que asuman cargos en los espacios de poder de toma de decisiones.

4. MUCHOS SIGLOS DE DISCRIMINACIÓN, A SESENTA Y SIETE AÑOS DE HABER ALCANZADO EL SUFRAGIO FEMENINO

Este capítulo visibiliza el aporte del movimiento feminista hondureño que tiene como momento histórico la lucha del movimiento sufragista que logró la aprobación del sufragio femenino en 1955, para que la mujer hondureña ejerciera los derechos civiles y políticos. Y desde las experien-

cias y saberes de las mujeres se desarrollan los avances y desafíos de la participación política de cara a los futuros procesos electorales. Así como se demuestra con información cualitativa los resultados electorales en los cargos de elección popular desde la perspectiva de género. Y se desarrollan los elementos teóricos políticos que retoma JASS de la ciencia política para el abordaje del poder.

4.1 El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres hondureñas

Alcanzar los derechos políticos ha llevado a las mujeres hondureñas más de doscientos años y apenas han sido nombradas en la modernidad por la lucha del voto femenino que hicieron las mujeres sufragistas desde 1954, enfrentándose a los sistemas políticos androcéntricos y oligárquicos para exigir el derecho al voto, cuando se introdujo por primera vez la cámara legislativa de la Ley para instruí el sufragio femenino finalmente aprobado en 1955.

Sin duda, “el reconocimiento formal de los derechos políticos de las hondureñas abrió el camino para incursionar en el ejercicio de la política, desarrollándose una diversidad de liderazgos, unos dentro de los contextos de los partidos políticos tradicionales y otros en el Partido Comunista, y también se amplió la participación de las mujeres en las organizaciones campesinas, obreras y gremiales. Los espacios autónomos de las mujeres campesinas marcaron un avance importante en cuanto a fuerza política en defensa de los derechos humanos. A mediados de la década de los 80s aparecen las primeras organizaciones autónomas feministas, que aún no se definen como feministas, pues el feminismo significa una categoría transgresora para la cultura política. Los prejuicios antifeministas estaban relacionados con los estereotipos de la cultura patriarcal, que ha penetrado en los sentimientos y visiones en el mundo subjetivo de las mujeres hondureñas.” (Fellez, 2011)

A pesar de los logros en construcción de políticas públicas y marcos legales para avanzar en los derechos políticos de las mujeres, aun enfrenta la discriminación de la comunidad política masculina para que las mujeres participen en igualdad de condiciones de los hombres en los espacios públicos/política, para propiciar cambios en el ejercicio del poder transformar las visiones y prácticas de como ejercer la política hacia el bienestar colectivo para el acceso a la justicia; y romper con las prácticas autoritarias, jerarquizadas e institucionalizadas en los partidos políticos en el Estado y la sociedad.

El movimiento feminista hondureño en el ámbito de las democracias liberales formales enfrenta serios desafíos estructurales y culturales para la participación plena de las mujeres en la política. Es así, que a finales de la década de los 90s en alianza con las mujeres políticas diputadas del Congreso Nacional y algunos diputados hombres sensibles a los derechos políticos de las mujeres, se realiza el proceso de incidencia política y cabildeo en los diputados hombres y mujeres para lo-

grar la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, aprobada el 11 de abril del año 2000, después de un proceso de negociaciones, confrontaciones y cabildos de las diferentes expresiones de los liderazgos del movimiento feminista con los liderazgos de los partidos políticos tradicionales representados en el Congreso Nacional de la República. Esta Ley constituye un marco jurídico para el avance de políticas públicas a favor de la equidad de género en Honduras. (Mujer, 2006)

El proceso de aprobación de esta ley en la Cámara Legislativa sucedió en un marco de confrontación mediante la toma del Palacio Legislativo por las mujeres representantes de las organizaciones feministas con las diputadas de los partidos políticos representantes de los partidos políticos (PN, PL, DC, PINUH y UD). diputados de los diferentes partidos se opusieron, con el argumento que algunos artículos iban ‘en contra de la moral y las buenas costumbres’ como el artículo 35 que establece que las jóvenes adolescentes embarazadas se les concederá permiso por maternidad en los centros educativos, sin poner en riesgo la continuidad de la educación, el artículo 81 sobre la participación política y toma de decisiones dentro de las estructuras de poder (artículo 81), que establece una base del 30% en forma progresiva, hasta lograr la equidad entre hombres y mujeres, aplicable a los cargos de elección popular y de dirección de los partidos políticos, diputadas propietarias y suplentes al Congreso Nacional de la República y de dirección de los partidos políticos, diputadas al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano, Alcaldes, Alcaldesas, Regidoras(es), en posición elegible de conformidad con una escala basada en los resultados de tres elecciones presidentes.” (Montesdeoca, 2003)

Es este periodo 2000-2009 fueron significativos los avances del Estado hondureño en impulsar cambios en la legislación nacional y en la institucionalidad de políticas públicas mediante la derogación de disposiciones y normativas legales que en su contenido discriminan y limitan las oportunidades de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos propiciando cambios en la Ley Electoral y Organizaciones Políticas. Sin embargo, los cambios en las subjetividades de los hombres y aún de las mujeres de la comunidad política hondureña, para promover, reconocer y valorar la participación política de las mujeres como un derecho ciudadano sigue siendo un desafío permanente y su acceso a los puestos de elección popular ha sido lento como demuestran los datos del 2002-2006 del Tribunal Supremo Electoral. Las mujeres solo representan el 7% de las diputaciones, el 9% de las Alcaldías, el 12% de las vicealcaldías y el 12% de las regidurías.

Es a partir de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 2000 y, particularmente, mediante las diferentes reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 2004-2012, que se propician la inclusión en el sistema electoral de mecanismos para promover y asegurar la participación y representación política de las mujeres, en particular, la cuota como mecanismo de acción afirmativa, y posteriormente la paridad.

La reforma del año 2004 a la Ley Electoral y Organizaciones Políticas (LEOP), hace obligatorio en los procesos electorales el cumplimiento de una cuota del 30% de mujeres para cargos de dirección partidaria y de elección popular (diputaciones en propiedad y en suplencia para el Congreso de la República y Parlamento Centroamericano, Alcaldías, Vice Alcaldías y Regidurías), que se aplique en las elecciones del 2005. Mediante las reformas del 2012 a la mencionada Ley, se incrementa la cuota al 40%, la cual se implementa en las elecciones primarias del 2012 de cara a las generales del 2013. Esa reforma también estimula el paso a la paridad 50% mujeres y 50% hombres con el mecanismo de alternancia, a partir del proceso electoral primario del 2016 y de las elecciones generales del 2017. Y para las elecciones generales de noviembre del mismo año por modificación de la Ley Electoral y Organizaciones Políticas (LEOP). (USAID, 2017)

El mecanismo de la alternancia, sin embargo, no logró alcanzar la paridad con el 50% de mujeres y el 50% de hombres, tal como lo muestran los resultados electorales principalmente en el Congreso en el periodo del 2006-2010. Las diputadas ascienden a 24.2% y, si bien disminuye a 19.5% en el periodo 2010-2014, se incrementa a 25.8% en el periodo 2014-2018. Estos resultados obedecen a cómo se estructura el sistema electoral hondureño. (Tribunal Supremo Electoral)

El estudio de Violencia Contra las Mujeres en la Política: Investigación en partidos políticos de Honduras, hace un análisis del sistema electoral hondureño desde una perspectiva de género, demostrando que, si bien “existen avances en la participación política de las mujeres hondureñas, aún existen brechas de género para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en relación con los hombres en la vida política y pública. El espacio público continúa siendo un ámbito predominante masculino por factores socioculturales, institucionales y de los actores políticos, que subestiman las capacidades de las mujeres en el quehacer político. Además, no se han producido cambios en la división sexual del trabajo asignando a las mujeres las responsables del trabajo reproductivo y el cumplimiento de este rol limita su participación política en el ámbito público por el deber de cumplir con las responsabilidades familiares. Y el estar los hombres permanentemente en el ámbito de lo público ejerciendo la política son los liderazgos masculinos los que tienen el reconocimiento de tener las habilidades y capacidades para ejercer la política”. (USAID, 2017)

Por otro lado, la VCMN está enraizada en las prácticas y en las dinámicas de los partidos políticos al ser consideradas seres naturales. Por ello, se necesita no solo la toma de conciencia de los partidos políticos sino de las (os) actores para propiciar cambios en la construcción de una cultura política libre de estereotipos y violencia. A nivel institucional especialmente los órganos del sistema electoral deben garantizar el cumplimiento de las reformas electorales y de las organizaciones políticas en lo que corresponde a la paridad, para motivar la participación política de las mujeres en los cargos de elección popular.

Según testimonios de la candidata a diputada Ilce Villatoro del Partido Libertad y Refundación, los partidos políticos aplican la paridad para las elecciones primarias y no para las elecciones generales. Las y los candidatos más votados en las elecciones primarias son los que ocupan las primeras posiciones en las planillas para las elecciones generales (no sujetas a la alternancia), que son los puestos elegibles. Generalmente el comportamiento del voto por parte de la población muestra una preferencia hacia las candidaturas masculinas al no haber cambios en la cultura política de que las mujeres voten por las mujeres que van en las planillas de cargos de elección popular. (Villatoro, 2022)

También se estima en los cargos de elección popular de las mujeres en relación con los hombres incide en la cultura de igualdad en la política. Los partidos políticos proponen como alcaldes a hombres y el electorado elige para los gobiernos municipales a los hombres como alcaldes y aún en las vicealcaldías y regidurías. Aunque la paridad se aplica para todos los cargos de elección popular. Esto significa que es consistente la discriminación de las mujeres en los cargos de elección popular permeado por un imaginario colectivo de la comunidad política que subestima las capacidades y el desempeño de las mujeres en el ámbito de la política. Los desafíos para garantizar la efectiva participación de las mujeres hondureñas en la vida política siguen siendo de preocupación tanto del movimiento feminista hondureño, como de los organismos internacionales que promueven y protegen los derechos civiles políticos de las mujeres.

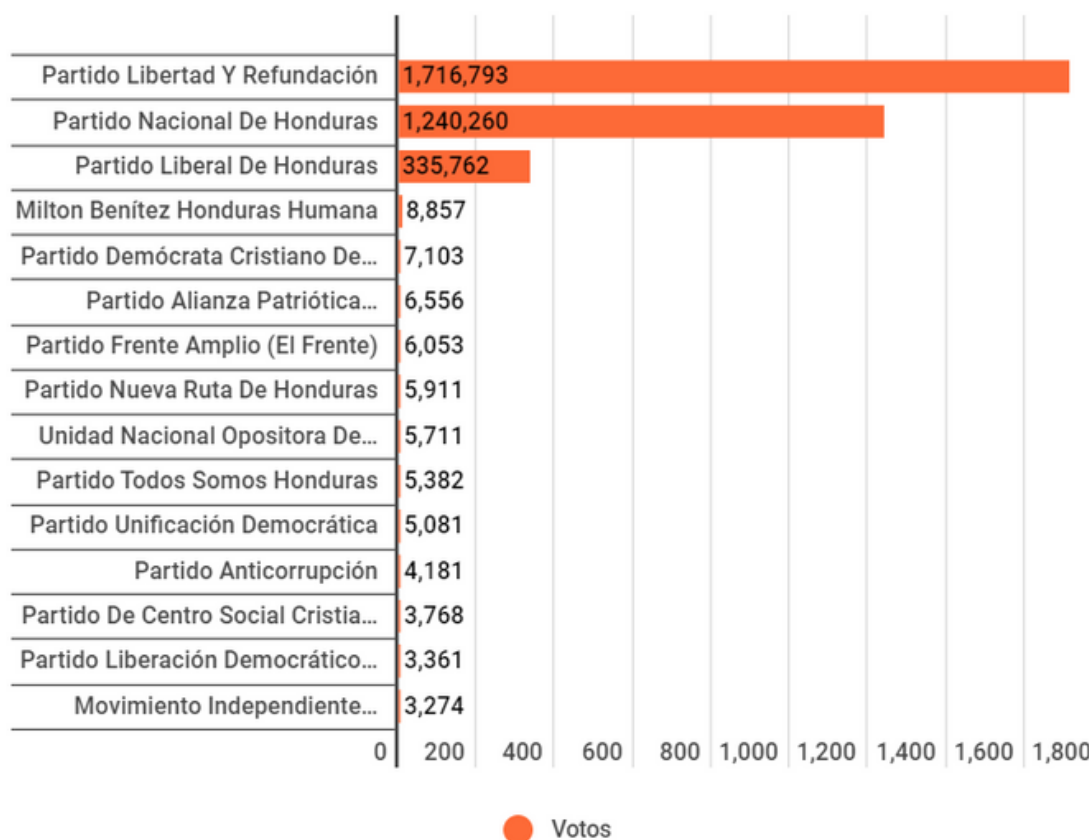
4.2 ¿Cómo les fue a las mujeres que optan a cargos populares en las elecciones generales?

Los hallazgos encontrados en la participación de los electores en las elecciones generales celebradas el 27 de noviembre del 2021, donde resultó electa la primera mujer como presidenta de la República, que representó la alianza interpartidaria que obtuvo el 51% de los votos. Por lo tanto, en una primera sección se visibilizan los resultados electorales por partido, el número de votos de candidatos por partidos y los resultados de elección popular. Y en la segunda sección el número de votantes por departamento, número de personas que votaron por sexo y los estratos de edad.

4.2.1. Resultados de las elecciones generales del 2021 y la representación de las mujeres en los cargos de elección popular

En las elecciones generales realizadas el 27 de noviembre del 2021 participaron 15 partidos políticos que conforman el sistema electoral hondureño. Al revisar los resultados electorales de cada uno de los partidos son el Partido Nacional (PN), Partido Libertad y Refundación (PRL) y el Partido Liberal (PL), los que lograron movilizar el mayor electorado del país.

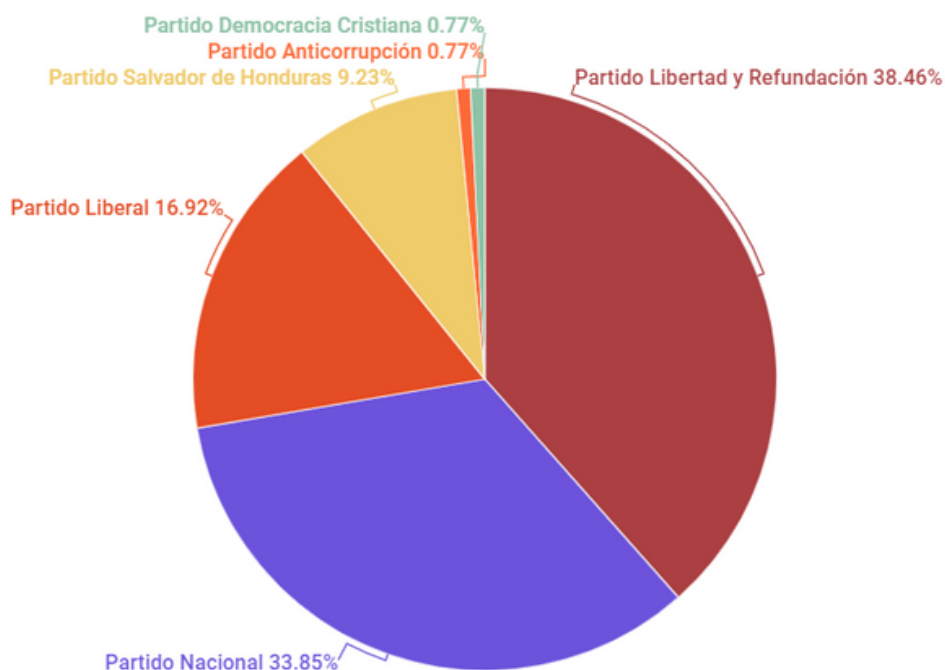
Gráfico N°2 Resultados Electorales Por Partido Político



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

Este gráfico demuestra que el Partido Libertad y Refundación obtuvo 1,716,793 (51.12%); le sigue el Partido Nacional 1,240,260 (36.93%) y el Partido Liberal 335,762 (10%). Estos hallazgos fundamentan los cambios en el sistema bipartidismo que se mantuvo más de dos siglos; el Partido Libertad y Refundación se convierte en la primera fuerza política, para asumir el poder en la conducción de la nación. Por otro lado, indica la diversificación de partidos con un número de 15 registrados en el Consejo Electoral para la contienda política y algunos de ellos no cumplen los requisitos que establece la Ley Electoral de las Organizaciones Políticas para mantener su registro. Muchos de estos partidos se consideran no elegibles para los votantes al solo surgir al momento de las elecciones generales, sin mantener una estructura orgánica sostenible.

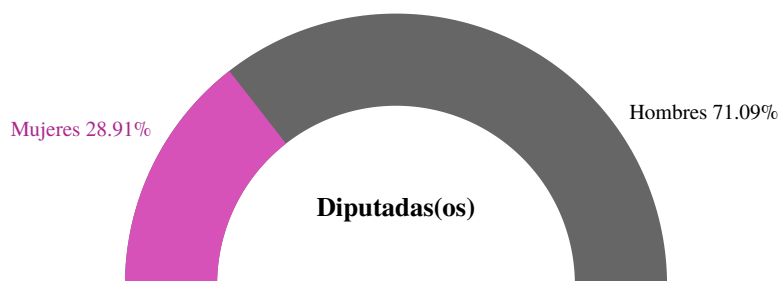
Gráfico N°2 Resultados Electorales Por Partido Político



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

El Partido Libertad y Refundación obtuvo 50 diputadas(as) que representa el 38.46% del total de las 128 diputadas(os) que conforman el Congreso Nacional de la República; el Partido Nacional 44 diputadas(os) el 33.85% y el Partido Liberal 22 diputadas(os) el 16.92% y el Partido Salvador de Honduras 12 diputadas(os) 9.23%. Y los partidos pequeños 1 el Partido Anticorrupción y otro el Partido Democracia Cristiana. Ninguno de los tres partidos políticos más votados logró una mayoría calificada por parte de las(os) electores. El bipartidismo tiene 66 diputadas (os) que corresponde al 51.5%. La composición de fuerzas políticas en el Congreso obliga a las alianzas interpartidarias para establecer consensos en la aprobación de leyes y decretos que exigen mayoría calificada.

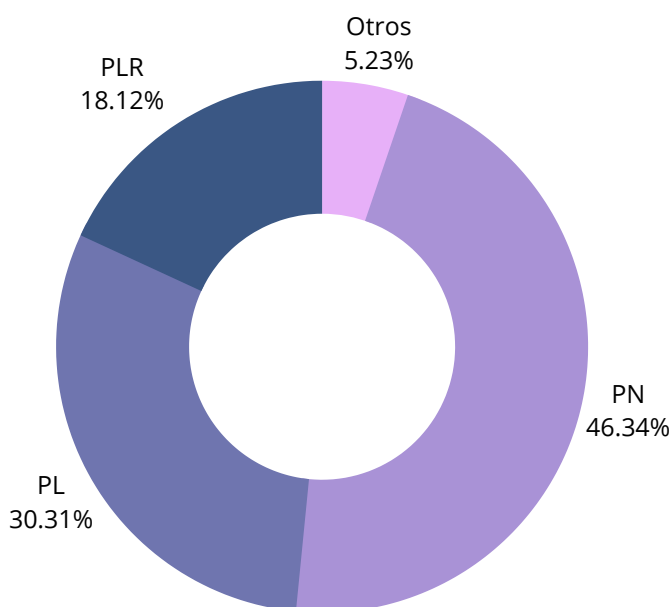
Gráfico N°4 Números de diputadas(os) por sexo



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

De los 128 diputadas y diputados electos 91 son hombres 71.09% y 37 son mujeres que significa el 28.91%. Los hallazgos indican que aún las mujeres hondureñas que se postulan a cargos de elección popular siguen muy distantes de alcanzar la paridad, lo que significa que la composición de este poder del Estado, las mujeres hondureñas están subrepresentadas. No obstante, es meritorio reconocer la incorporación de las mujeres diputadas en la conformación de comisiones sobre los temas de agenda del Congreso para dictaminar decretos o leyes de interés nacional, como: la Ley de Amnistía; y la derogación de leyes que significa un retroceso para la soberanía y democracia como: la Ley de las ZEDES y la Ley de Empleo por Hora.

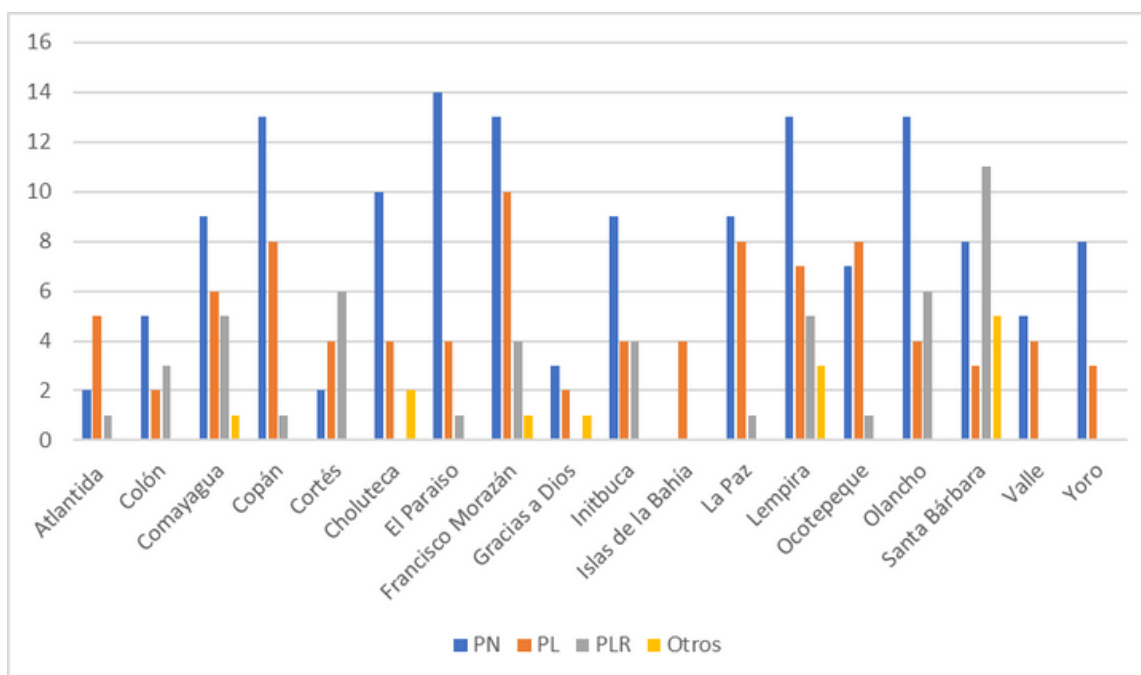
Gráfico N°5 Número de alcaldías por partido



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

De las 298 alcaldías 141 (48.45%) pertenecen al Partido Nacional, 91 (31.27%) al Partido Liberal, al Partido Libertad y Refundación 48 (15.12%) y mediante el sistema de alianzas 15 (5.15%). Es el bipartidismo que representa un poder en los gobiernos locales; pese al aporte de las mujeres en impulsar programas y proyectos de bienestar social en los municipios están subrepresentadas en las corporaciones municipales, lo que limita el avance de políticas públicas desde la perspectiva de género contempladas en el II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras, que define acciones estratégicas y responsabilidades a los gobiernos municipales en los temas de: VCMN, salud sexual y salud reproductiva, promoción, protección y garantía del derecho a la educación, a los derechos económicos sociales y culturales de las mujeres hondureñas y el acceso y uso sostenible y control de la biodiversidad los recursos naturales y gestión de riego.

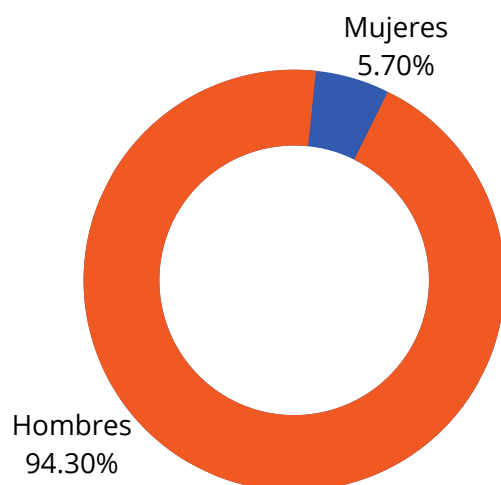
Gráfico N°6 Número de alcaldías por partido político y departamento



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

En cuanto a los gobiernos locales el Partido Nacional tiene 141 alcaldías en 17 departamentos, el Partido Liberal 91 alcaldías en los 18 departamentos y el Partido Libertad y Refundación 48 en 13 departamentos; y alianzas entre PL y PLR 11 el 3.7% en los departamentos de Comayagua, Choluteca, Gracias a Dios, Lempira, Santa Bárbara e Intibucá. Estas cifras demuestran que son los liderazgos masculinos de los partidos políticos tradicionales los que tienen mayor representación en los gobiernos municipales. Las mujeres siguen siendo discriminadas para participar en igualdad de oportunidades que los hombres en los cargos de elección popular de los gobiernos locales.

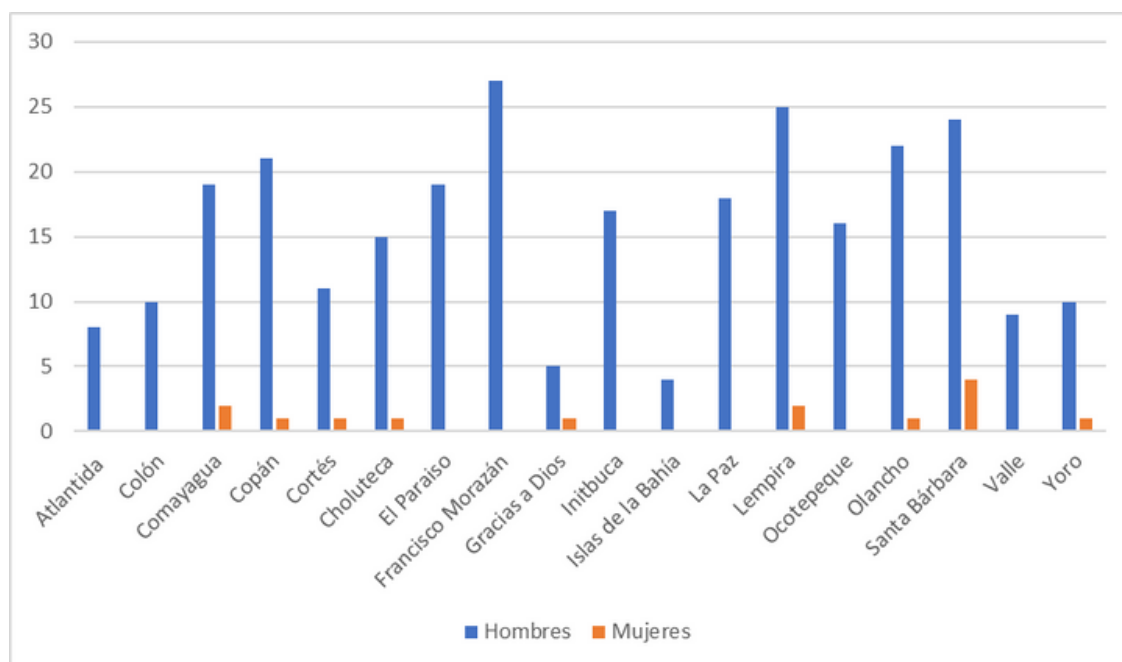
Gráfico N°7 Número de alcaldías por sexo



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

De las 298 municipalidades en Honduras 281 están dirigidos por hombres que corresponde al 94.3% y 17 por mujeres el 5.70%. De tal manera, que la participación política de las mujeres en los gobiernos municipales es una manifestación de la discriminación y violación a los derechos políticos de las mujeres hondureñas.

Gráfico N°8 Número de alcaldías por sexo y departamento

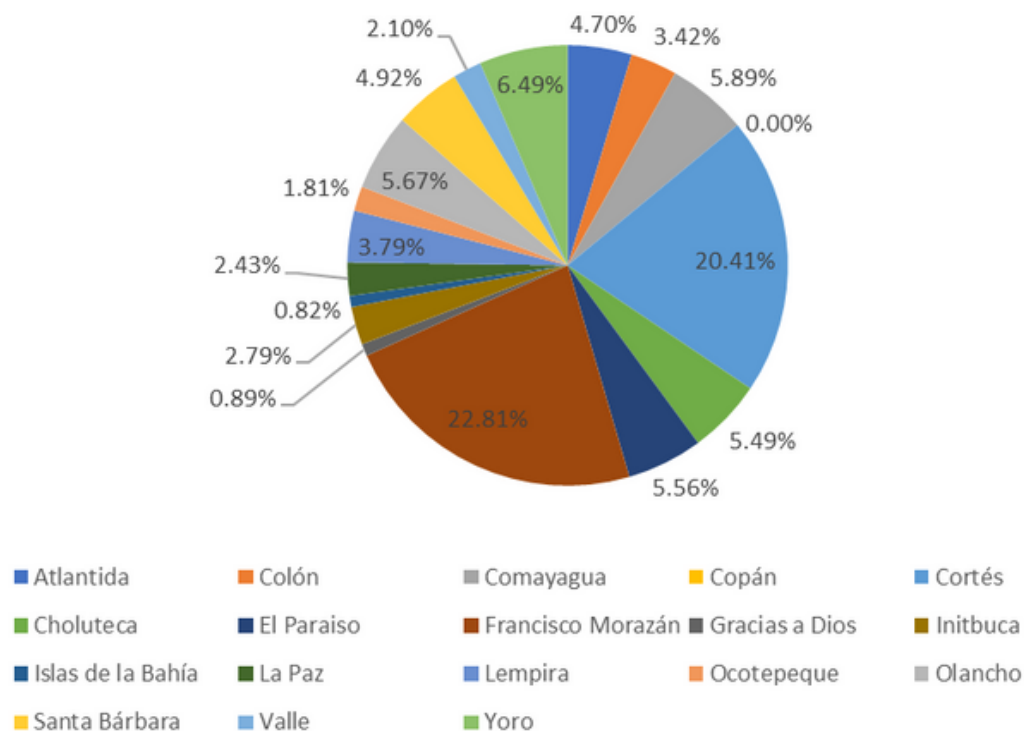


Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

De las 298 alcaldías 17 son mujeres que pertenecen a los municipios de, Lamaní, y Ojo de Agua, Comayagua; San Antonio, Copán; Puerto Cortés en Cortés, Concepción de María, Choluteca; Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios; Cololaca, San Francisco y Tomala, Lempira; La Unión, Olancho; Chinda, Macuelizo, Naranjito y San Nicolás, Santa Bárbara; Yoro, Yoro. Son los departamentos de Comayagua, Lempira y Santa Bárbara, donde la población votante eligió mujeres para ocupar los cargos de Alcaldesas. Lo que significa un reto para fortalecer los espacios políticos donde las mujeres han posicionado sus liderazgos a nivel del municipio, que permita avanzar en la implementación de políticas públicas desde la perspectiva de género e incidir en la agendas y presupuestos de los gobiernos municipales, para incorporar las demandas y propuestas de las agendas de las redes y organizaciones de mujeres y feministas a nivel municipal

4.2.2. Características de los votantes

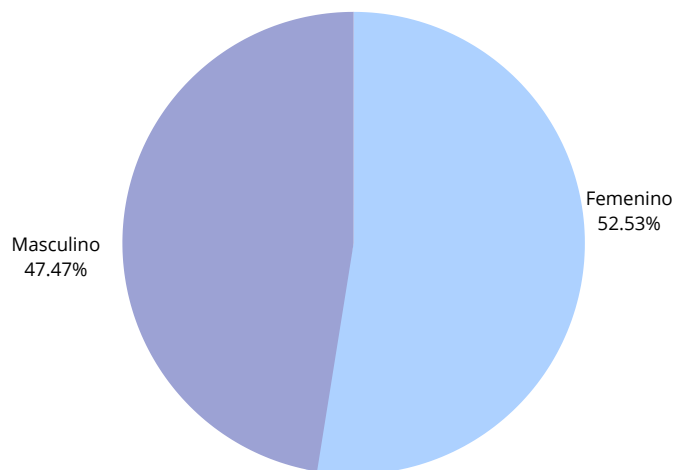
Gráfico N°9: Número de votantes por departamentos



Fuente: elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

Son los departamentos de Francisco Morazán y Cortés que representaron el 43% de personas de las que acudieron a las urnas, siendo los principales departamentos del país, por sus funciones políticas y económicas; además concentran mayor número de población, 1,796,239 habitantes Francisco Morazán y 1,285,175 habitantes Cortés, ambos departamentos poseen el 31% de la población total.

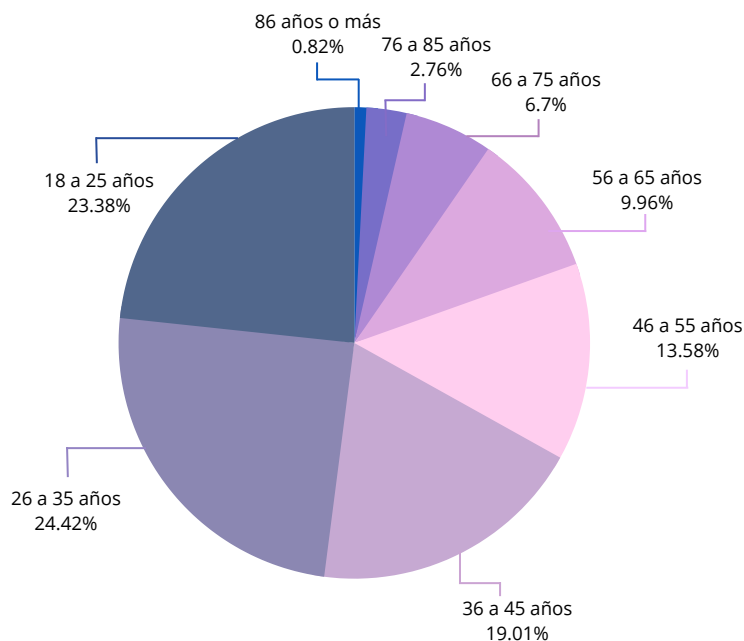
Gráfico N°10 Número mujeres y hombres que ejercieron el sufragio en las elecciones noviembre del 2021



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

El 52.53% corresponde a la población femenina que ejerció el sufragio y el 47.47% los hombres, son las mujeres las que mayor participación en el ejercicio del sufragio.

Gráfico N°11 Número de personas que ejercieron el sufragio el 27 noviembre 2021 por edad



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Elecciones Honduras 2021

Es el estrato de edades entre 18-45 años, el 66.79 de la población que ejerció el voto en las elecciones generales del 27 noviembre del 2021; demostrando que es la población joven la que se sintió convocada en proceder a votar de manera masiva, lo que denota que esta población asistió a las urnas motivada por la esperanza, por un cambio de refundación y transformación de país y en especial en desmontar la dictadura del régimen de Juan Orlando Hernández.

4.3. Reflexiones teóricas del poder desde la mirada feminista

JASS ha desarrollado un marco de poder que se basa en la siguiente definición: “Al poder se le puede definir como el grado de control sobre los recursos materiales, humanos, intelectuales y financieros que ejercen diferentes secciones de la sociedad. El control de estos recursos se convierte en una fuente de poder individual y social...” (Miller, et.al. 2006)

También se alimenta de otros insumos:

“El poder entendido correctamente no es más que la habilidad para alcanzar un propósito. Es la fuerza requerida para generar un cambio social, político y económico”. - Martin Luther King; Líder del Movimiento de Derechos Civiles de EUA

“Una buena forma de definir el poder en la realidad actual, es que el PODER es la capacidad de los individuos o grupos de determinar: Quién consigue qué, quién hace qué, quién decide qué, y quién define la agenda”. – Srilatha Batliwala con Gender at Work

"[] El poder es relacional, dinámico y multidimensional, y cambia según el contexto, la circunstancia y el interés. Sus expresiones y formas pueden ir desde la dominación y la resistencia a la colaboración y transformación". – Lisa VeneKlasen y Valerie Miller, JASS.

Este análisis de poder contempla tres formas de poder opresivo (poder sobre) en una sociedad patriarcal: el poder visible, el poder oculto y el poder invisible.

El poder visible/formal: el poder político estatal y formal se ejerce a través de leyes, normas, tribunales, instituciones, políticas, toma de decisiones y observancia de las normas.

El poder oculto: intereses organizados – tanto legales como ilícitos – que actúan entre bastidores para influir en las decisiones y controlarlas, al igual que en los recursos, los medios, y la vigilancia policial para promover y proteger sus intereses.

El poder invisible: el poder interiorizado de creencias, normas sociales y cultura para determinar la cosmovisión de la gente y el sentido de lo que es “correcto” o “normal”, junto con la manipulación estratégica de esas creencias, a fin de legitimar ciertas ideas y acciones políticas, incluyendo la violencia.^[1]

^{1]} < JASS poder, <https://justassociates.org/es/que-hacemos/poder/>

Las líneas entre ellos no son siempre claras y a menudo se superponen.

Aplicando este marco, Honduras ha tenido en los últimos treinta años un atisbo de democracia representativa que se fue desdibujando en la medida que los poderes formalmente constituidos se fueron atribuyéndose poderes extraconstitucionales y extralegales, y los poderes de facto (poderes ocultos), tanto nacionales como internacionales, fueron marcando la pauta a seguir en el rumbo del país en materia de desarrollo económico y social, colocando sus intereses sobre los intereses del pueblo en general.

Cuando se vieron ligeramente amenazados sus intereses, esas mismas fuerzas llegaron a perpetrar un golpe de Estado en el año 2009. A pesar de movilizaciones masivas del pueblo, no se logró restituir el orden Constitucional, y de ahí se establece en un régimen dirigido por el Presidente Porfirio Lobo, con claro protagonismo de Juan Orlando Hernández (JOH) como presidente del poder legislativo. Al lograr tener bajo su control a las bancadas del Partido Liberal y Unificación Democrática, da un golpe técnico al Poder Judicial, destituyendo a cuatro magistrados de la Corte en 2012. Este acto representa el segundo golpe a la democracia e hizo saltar las alarmas a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, JOH logra convertirse en Presidente de la nación en 2013, llevando al declive acelerado de la débil democracia. JOH y sus aliados llegan a controlar la Corte Suprema, el Poder Legislativo, la Fiscalía General y demás órganos controladores de Estado, incrementándose a nivel alarmante la corrupción y violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos. A la vez se concentran poderes en un ejecutivo autoritario, aliado con elementos criminales que lleva a calificar al Estado de Honduras como “narco estado” debido a los vínculos señalados en un juicio librado en la Corte de Nueva York contra el hermano del Presidente. En estos sucesos, se consolida el poder de la élite política/económica/militar/criminal, tanto visible como oculto, y con el apoyo tácito de los gobiernos de EEUU se logra controlar, más no extinguir, el poder popular a través de la represión, la judicialización y el desplazamiento.

Principales riesgos o desafíos para alcanzar las apuestas feministas, desde el marco del poder de JASS.

Aplicando este marco a la coyuntura actual en Honduras, vemos:

Poder visible/formal: Se trata de los (as) actores que toman las decisiones y aplican las reglas, entre ellos, instituciones de gobierno y funcionarios públicos. ¿Quiénes son? ¿Qué intereses representan? El poder visible en Honduras en el gobierno de JOH actuaba con un rostro público y un rostro oculto.

Poder oculto: En Honduras, tras el triunfo de Xiomara Castro en 2021, los poderes ocultos siguen teniendo un fuerte papel en la política hondureña. Determinan frecuentemente la agenda política, son

el poder detrás del trono ahora en la oposición vis a vis la presidencia, pero no por eso debilitados. Se ejerce a través de personas e instituciones poderosas, capaces de controlar a quienes son responsables de tomar decisiones, por ejemplo; iglesias, empresas, movimientos sociales, crimen organizado etc. La pregunta para medir la fuerza de estas fuerzas es: ¿Qué intereses dominan la agenda política y la toma de decisiones? ¿Cuáles son las negociaciones, presiones y amenazas, muchas veces tras las bambalinas, que influyen en las políticas públicas y las decisiones políticas?

Poder invisible: Este poder determina el significado de los valores y las normas., construye narrativas, busca influir en cómo piensa la gente a través de los medios, los mensajes desde el gobierno y sus instituciones, y en otros espacios. Hay influencias que afectan los sistemas de creencias y las normas frente a la problemática, y que moldean cómo las personas perciben el mundo en que viven, cómo se perciben a sí mismas, cuál es su lugar en el mundo, a que pueden aspirar. Los espacios de socialización desde la primera infancia van instaurando los valores y normas sociales de acuerdo a los intereses de ciertos grupos que llegan a acumular tanto poder que los tomadores de decisiones difícilmente desafiarán.

Honduras: Cambio en el poder visible/formal, persistencia de los poderes ocultos

El 28 de noviembre se dio un cambio histórico en la conformación del poder formal con la elección de Xiomara Castro, rompiendo el monopolio sobre el poder ejecutivo sostenido por 33 años por los Partidos Nacional y Liberal, con acuerdos bajo la mesa, compartiendo el poder, siempre en sintonía con el poder hegemónico de USA.

Entró la oposición compuesta por actores de la coalición partidaria; Partido Salvador de Honduras, Partido Innovación y Unidad (PINU), Social Demócrata y Libertad y Refundación (LIBRE). Este cambio en el poder formal también cambia la correlación de fuerzas con los movimientos sociales que luchan por la democracia, el bienestar del pueblo y la justicia social, de manera destacada los movimientos feministas y otros que abanderan las demandas por la igualdad de género. La Presidenta Xiomara Castro es ahora su principal aliada en el gobierno.

Para el movimiento de mujeres y feministas, esta nueva coyuntura es hasta cierto punto favorable. Las organizaciones de mujeres agrupadas en la Plataforma 25 de noviembre lograron que la candidata y ahora presidenta firmara un pacto donde se compromete a adoptar las principales demandas del movimiento (ver apartado 7: Plan de gobierno de Xiomara Castro y la agenda política del movimiento de mujeres y feministas). Es así que por primera vez es incorporado en un plan de gobierno las principales demandas feministas, entre ellas; restituir la venta de las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE), despenalizar el aborto por las tres causales 1. cuando la vida de la mujer está en riesgo. 2. cuando es producto de una violación sexual y 3. cuando existen graves malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina. Implementar la educación se-

xual integral en todos los niveles educativos; y aprobar la Ley de Casas Refugios para mujeres en riesgo. Cabe señalar que esta última fue presentada al Congreso desde el 2017, en ese momento se dieron falsas esperanzas porque fue dictaminada con prontitud, pero no fue aprobada, y desde entonces a pesar de haber hecho diversas acciones de incidencia, sigue archivada por los partidos conservadores.

Tener el apoyo de la titular del poder ejecutivo, tiene una gran ventaja, por el poder que tiene sector ejecutivo y ya que su respaldo pueda influenciar positivamente en los otros poderes del Estado.

Por otro lado, con el cambio en la presidencia y en la nueva conformación del Congreso dentro del poder visible en las estructuras formales del gobierno, siguen muchos elementos corruptos y opuestos a los derechos de las mujeres. El nuevo Presidente del poder legislativo, Luis Redondo, apoyó contundente el proyecto de ley que prohibiera el aborto de forma absoluta, iniciativa conocida como el “escudo contra el aborto” a principios del año pasado. Su postura conservadora con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es conocida por el movimiento de mujeres y feministas.

Grupos de poder / oculto, su capacidad de influenciar en la toma de decisiones, que rigen la sociedad hondureña.

Las cúpulas religiosas tienen un poder fuerte sobre la sociedad y principalmente sobre tomadores de decisiones, su influencia ha sido marcada históricamente, sin embargo, en los últimos doce años llegaron a penetrar todos los poderes del Estado como un poder oculto—no elegido ni reconocido formalmente—, contraviniendo lo dispuesto por la carta magna que define al Estado de Honduras como un Estado Laico. Tal ha sido su influencia que fue y sigue siendo normal ver oficios religiosos en el hemiciclo legislativo antes de cada sesión parlamentaria.

Estos grupos jugaron un papel clave en promover la prohibición absoluta del aborto, incluso se reformó el Artículo 67 de la Constitución de la República, elevándolo a “artículo pétreo”, el cual para ser modificado requerirá mayoría calificada, de manera que, se blinda la prohibición del aborto. Además, ratificó el Artículo 112 de la Constitución sobre la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo— el Artículo señala que “se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los conyuges, los matrimonios y la unión de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras”. Son solo algunos ejemplos del poder de la iglesia en oponerse a los derechos de las mujeres y comunidad LGTBIQ en Honduras.

Otro de los poderes influyentes son los medios de comunicación. En Honduras, existe un monopolio de medios de comunicación en manos de 5 familias; Rosenthal, Ferrari, Canahuati, Flores y Nasser, no es casualidad que también tienen negocios en sector de salud, agronegocios,

bancos, sector energético, infraestructura vial etc., el poder que detentan es tal, que No es de extrañar que algunos tomadores de decisiones, tengan tanta cautela frente al denominado cuarto poder, pues temen a una reacción en cadena que pudieran provocar los sectores conservadores usando la maquinaria mediática que está a su disposición. Cabe señalar que en Honduras han proliferado las radios y canales de TV en manos del sector religioso, hasta el 2021 26 radios religiosas y 11 canales de televisión, con clara postura en favor del régimen en su mayoría.

Finalmente, el poder invisible del control social en Honduras consiste en las normas sociales de corte conservadoras que han dominado en la sociedad hondureña y que son contruidos y reforzados por estos poderes ocultos y visibles, en particular la iglesia y los medios. A través de ellos se ha reforzado el patriarcado y el machismo, imperando la cultura de la violencia, normalizando conductas abusivas machistas en lo cotidiano, y en el imaginario colectivo. Se ha posicionado una narrativa de odio contra el feminismo y contra lo femenino, considerándose como un riesgo que atenta contra el orden establecido, contra la institución de la familia, y contra la moral y las buenas costumbres. Esta narrativa fue utilizada en la campaña contra Xiomara Castro, por ejemplo; indicar que la campaña de Xiomara promete respetar los derechos de las mujeres, en ese sentido se hicieron publicaciones grotescas- imágenes de la candidata con cuchillo en mano haciéndole ver como asesina de niños, en referencia a la aprobación de las PAE y la aprobación de la ley de aborto por las tres causales, a pesar de ser diametralmente opuesto a la realidad que se vive en un narco estado donde el sistema dominante es la peor amenaza a la vida, un estado donde la muerte camina desnuda a la vista de todos, donde la violencia sexual, el robo, y el narcotráfico se promueve como vidas de éxito en los medios televisivos y redes sociales.

5. VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia política contra las mujeres es una problemática multidimensional, asentada en construcciones socioculturales que se expresa en relaciones de poder que ejercen los hombres en contra de las mujeres en sus diferentes manifestaciones (física, emocional, económica, simbólica y sexual), en el ámbito público y privado. La discriminación y desigualdad que tienen consecuencia en la vida de las mujeres, e influye en el goce de igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación: clase social, etnia, raza, edad, orientación e identidad sexual.

La violencia contra las mujeres que se ejerce en la política constituye una violación a los derechos humanos, socava la democracia y es uno de los principales obstáculos para impulsar a las mujeres que participan en los diferentes espacios públicos donde se ejerce la política. Las mujeres de todas las edades y de su estatus social y económico enfrentan situaciones de discriminación cuando participan en los cargos de elección popular y en las organizaciones sociales en los espacios comunitarios, como: diputadas, al parlamento Centroamericano, alcaldesas, vicealcaldesas, regido-

ras entre otras. Según el testimonio de la diputada Doris Gutiérrez, en el ejercicio de su cargo enfrentó diferentes manifestaciones de violencia: “El presidente del Congreso me negaba la palabra. Permitía que todos los diputados se expresaran y siempre me dejaba con la mano levantada. Llegué a taparme la boca con un pañuelo en señal de protesta”. (Ortega, 2021)

En la actual legislatura, la diputada Melbi Concepción Ortiz de Libertad y Refundación de Yoro, denunció en la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, las agresiones verbales del diputado Bartolo Fuentes.

Las mujeres concejales del Congreso Nacional Electoral enfrentaron por parte de líderes políticos del partido de gobierno varios reclamos, acusaciones en el ejercicio de su cargo, con calificaciones estereotipadas moralistas como: caprichosas, inexpertas y que sus decisiones estaban basadas en emociones. Esta lista de epítetos era expresada por hombres que se sentían con la autoridad para dar cátedra de “moralidad” teniendo como propósito atemorizarlas, presionarlas y obligarlas actuar en contra de su ética en el ejercicio del cargo.

También se escucharon testimonios de mujeres políticas que participaron en los cargos de elección popular como: candidatas a diputadas, alcaldesas, vicealcaldesas o regidoras, quienes en sus municipios y diferentes escenarios vivieron situaciones de violencia en sus diferentes manifestaciones como: boicot en no permitirles hablar en las asambleas o manifestaciones públicas para presentar sus propuestas que impulsarían a ser electas. Se les destruía el material de campaña con mensajes violentos en el rostro en los afiches colocados en los postes y vías públicas y en las redes sociales se posteaban mensajes descalificativos a las candidatas mujeres.

Las mujeres jóvenes reciben por parte de los hombres de los diferentes partidos políticos y movimientos, acciones de hostigamiento, chantaje y abuso sexual y promesa de aportes económicos para que se postulen a cargos de elección popular, prometiéndoles que las colocaran en posiciones elegibles asegurándose compromisos sexuales de parte de las postulantes.

Las mujeres que participaron en las mesas electorales en las elecciones generales viven constantes intimidaciones por las y los líderes de los partidos cuando reclaman irregularidades que realizan los representantes de los partidos políticos, como cuando activistas políticos presionaban desde la entrada al votante para ejercer el sufragio a favor de su partido. Además, la(os) representantes de los partidos políticos en las mesas electorales que no representan al bipartidismo no cuentan con suficientes recursos económicos y logísticos, enfrentando condiciones desiguales y discriminatorias al no contar con medios de transporte, alimentación y tecnología. Y una vez cerradas las urnas cuando se practica el conteo, los representantes de los partidos políticos que no les favorece el voto electoral ejercen actos de intimidación, presión y violencia. Es común que los activistas políticos, cuando su candidato va perdiendo, realizan acciones para incentivar el miedo y el terror tanto a los representantes de las mesas como a los simpatizantes en los centros de votación.

Las diferentes formas de violencia que enfrentan las mujeres en el proceso electoral constituyen uno de los factores que desmotiva la participación política de las mujeres, por ello, es necesario impulsar cambios de sensibilización, formación en los miembros de los partidos políticos, en las instituciones del sistema electoral y de la ciudadanía, que garantice crear condiciones subjetivas, jurídicas e institucionales, para la construcción de una cultura política libre de todo tipo de violencia.

6. AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

El aporte de esta sección está orientada en puntualizar los avances en las políticas públicas y la normativa jurídica para la participación política de las mujeres hondureñas y algunos desafíos que deben considerar el sistema electoral, las instituciones encargadas de promover y proteger la participación política de las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas para continuar impulsando acciones afirmativas que deben ser incorporadas en las políticas públicas y en el marco jurídico nacional en promover y proteger los derechos políticos de las mujeres hondureñas.

6.1 Avances en políticas públicas y leyes para la participación política de las mujeres hondureñas

El Estado de Honduras ha ratificado instrumentos y tratados internacionales para garantizar la plena participación política de las mujeres hondureñas, en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Cabe mencionar entre ellos: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Pacto de Derechos

Económicos y Culturales; La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres CEDAW; y la Convención de Belén Do Pará.

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), en el Artículo 1 establece “a los efectos de la presente convención, la expresión de discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujeres, de los derechos humanos y libertades fundamentales, en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. (Instituto Nacional de la Mujer, 2006)

La Convención de la CEDAW reconoce el concepto de igualdad sustantiva, es decir, no se trata solo de alcanzar la igualdad formal, sino la igualdad real que apunta a las transformaciones sociales culturales, reconociendo el papel de la cultura y las tradiciones, así como de los roles y estereotipos entre mujeres y hombres, como aspectos fundamentales que contribuyan al mantenimiento de la discriminación hacia la mitad de la población.

Y en los Artículos 2 y 3 obliga a los Estados Parte que utilicen todos los medios apropiados sin dilaciones para implementar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y en todas las esferas (política, social, económica y cultural), para la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Y en el artículo 7 los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

La Convención de Belén Do Pará en el Artículo 1 define la violencia contra la mujer “cualquier atención o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico la mujer tanto en el ámbito público como privado”. También establece el derecho a una vida sin violencia, tanto en el ámbito público como privado. En el Artículo 7 consagra los deberes de los Estados en la adopción por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, el Estado hondureño en las Conferencias y Cumbres Mundiales, particularmente en la Conferencia de Población y Desarrollo CAIRO 1994 y la Conferencia Mundial en Beijing en 1995, ha ratificado los compromisos de los Estados en garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres mediante la emisión e implementación de políticas públicas y marcos legales, que promuevan e impulsen la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones.

A nivel de los marcos legales y políticas públicas el Estado hondureño aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer mediante decreto N° 34-2000. En el artículo 81 establece que para que para lograr la participación efectiva de la mujer, se establece una base del “30%” en forma progresiva, hasta lograr la equidad entre hombres y mujeres, aplicable en lo relativo a los cargos de dirección de los partidos políticos, diputadas(os), propietarios y suplentes al Congreso Nacional de la República, al parlamento centroamericano, Alcaldes y Alcaldesas y regidores(as) y posiciones elegibles de conformidad con una escala basada en los resultados de las tres elecciones presidentes” (Instituto Nacional de la Mujer, 2006)

A partir de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer “2000”, “se impulsaron reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que se propicia la inclusión en el sistema electoral de mecanismos para promover y asegurar la participación política de las mujeres se incrementa la cuota al 40% la cual se implementa en las elecciones primarias en el 2012 de cara a las elecciones generales realizadas en el 2013. Esa reforma también estipula el paso a la paridad 50% mujeres y 50% hombres con el mecanismo de alternancia a partir del proceso electoral primario del 2016, que pasó a marzo del 2017 y para las elecciones generales de noviembre del mismo año por modificación de la Ley Electoral y de las organizaciones políticas que regula en el artículo 105-A principio de paridad”. (USAID, 2017). De alguna manera, estas reformas motivaron la participación política de las mujeres alcanzando en las elecciones generales

del 2021 resultaron electas 33 mujeres diputadas que significa el 28.9%.

El II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, en el eje 1 desarrolla lineamientos estratégicos y políticas, para garantizar que el Estado hondureño promueva y establezca mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación en los cargos de elección popular y en todas las instalaciones de dirección y decisiones de las funciones establecidas en los diferentes poderes del Estado. Entre las acciones prioritarias están: mecanismo de afirmación afirmativa; asegurar que el Consejo Nacional Electoral establezca mecanismos jurídicos e instrumentos técnicos para garantizar la aplicación efectiva de las Leyes en especial de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en la conformación de los listados de las candidaturas de las organizaciones y movimientos políticos en todos los procesos electorales incluidas las elecciones primarias a nivel nacional, regional, departamental y promover y fortalecerla forma política de las mujeres, entre otras.

Es importante destacar que, en la construcción de la agenda política del movimiento de mujeres y feministas elaborada en julio del 2017, define tres líneas estratégicas con los respectivos indicadores de resultados para lograr la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en las diferentes estructuras que devienen de los poderes del Estado, administración pública, organizaciones sociales comunitarias, para lograr el acceso en la toma de decisiones públicas. Entre ellas están: elaboración e implementación de mecanismos legales e institucionales que aseguren la participación política de las mujeres hondureñas, y elaboración e implementación de procesos de participación y las labores de auditoría social.

Por otro lado, es importante fortalecer el Foro de Mujeres de los Partidos Políticos al ser un espacio de incidencia política en la cual están incorporadas diputadas de los diferentes partidos políticos electas en el Congreso Nacional de la República, con iniciativa de ley para impulsar decretos y leyes que promuevan y protejan los derechos políticos de las mujeres hondureñas. Así como, influir en la agenda del Congreso Nacional en la incorporación de propuesta de Ley como la iniciativa de ley En Contra del Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres.

El movimiento de mujeres y feministas hondureñas ha trastocado la cultura política androcéntrica y discriminatoria que ha mantenido por siglos la exclusión de las mujeres. Los avances institucionales, jurídicos y culturales se deben al aporte de las acciones de incidencia política y en el establecimiento de alianzas con mujeres diputadas en el Congreso Nacional y con actores claves a nivel del Estado y la sociedad, para acompañar las propuestas de acciones afirmativas que impulsan las diferentes expresiones del movimiento feminista.

6.2 Desafíos de la participación política de las mujeres hondureñas de cara a las próximas elecciones

Entre esos desafíos pendientes está la violencia política que enfrentan las mujeres en los partidos políticos, y en los movimientos internos, las asambleas, manifestaciones públicas, y como candidatas en las contiendas electorales. Las diferentes manifestaciones de violencia que viven las mujeres en los espacios públicos se expresan a través de mensajes descalificativos, hostigamiento, acoso sexual, chantaje y manipulación. (Villatoro, 2022) Abundan los testimonios de las mujeres políticas que han participado en contiendas electorales donde prevalecen escenarios violentos y las acciones autoritarias y descalificativas de los hombres que se postulan en los cargos de elección popular. Ellas afirman que estos dos factores son determinantes para desmotivar a las mujeres de continuar participando en una segunda postulación.

Los procedimientos y las reglas para participar en los sistemas electorales lo deciden las estructuras jerárquicas de los partidos políticos, el presidente del partido y del movimiento. Ambos cargos generalmente son ocupados por los hombres, quienes determinan las posiciones en la papeleta electoral al ubicar los hombres y mujeres más votados en las elecciones primarias en la papeleta de las elecciones generales de los partidos políticos, afectando la posibilidad de salir más mujeres en los cargos elección popular, ya que no se supervisa ni se respeta la paridad en la nómina electoral.

El otro desafío es el acceso a recursos económicos para que las mujeres que optan a cargos de elección popular tengan opciones de financiar las campañas electorales con costos onerosos en los medios de comunicación. Más el financiamiento de la logística, pago de representantes de las mesas electorales en las elecciones primarias y generales. Los candidatos hombres tienen acceso a recursos tanto de amigos, empresa privada, acceso a crédito en los bancos a poseer bienes inmuebles, haciendas y, además, controlan las estructuras jerárquicas de los partidos negocian cargos con las y los dirigentes tanto a nivel de los gobiernos locales y en la administración pública.

Los factores culturales que acentúan la desigualdad y la discriminación de las mujeres para participar en la política en igualdad de condiciones que los hombres limitan el cumplimiento de la paridad 50% mujeres y 50% hombres. Sigue la desvalorización de los liderazgos de las mujeres en los cargos de elección popular mediante prejuicios moralistas que deslegitiman su capacidad intelectual, méritos y ser reconocidas como sujetas políticas. Sobran los argumentos de los hombres para justificar la no participación de las mujeres en el ámbito de la política, que no tienen pensamientos, son seres emocionales, caprichosas, no están preparadas para gobernar, a veces dicen también que no quieren. Como también, las mujeres naturalizan en su imaginario colectivo las descalificaciones de los hombres hacia ella en la política de los valores y prejuicios “que las mujeres somos envidiosas, los hombres no, no se reconocen las capacidades de sus pares, es muy joven no tiene experiencia en la política, es muy vieja, repite los mismos discursos”. El reto de desmontar la cultura patriarcal que acentúa la desigualdad y discriminación como construcción so-

cial en los diferentes espacios donde se ejerce la política, es un compromiso pendiente del Estado hondureño y la sociedad.

7. PLAN DE GOBIERNO DE XIOMARA Y LA AGENDA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISTAS

En esta sección se demuestra la visión de refundación de país, que impulsará la Presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya y el abordaje de los problemas estructurales donde se incluyen las propuestas y demandas de la agenda política del movimiento feminista hondureño, encaminadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos sociales y culturales de las mujeres hondureñas.

7.1 La visión de refundación del país y los problemas estructurales que aborda el plan de gobierno

El plan de gobierno que presentó Iris Xiomara Castro Sarmiento como candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) recoge las demandas del pueblo expresadas en las calles desde hace más de dos décadas. Es preciso recordar que la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular que aglutinó las organizaciones populares del país, llevó a cabo conversatorios bimensuales desde el año 2003 hasta el 2009 y discutió y llegó a definir una agenda que contenía 12 puntos o demandas al gobierno de turno de Ricardo Maduro, sin embargo, esas demandas se han mantenido a lo largo del tiempo. Algo de esa agenda se llegó a cumplir en el periodo del Presidente José Manuel Zelaya, entre ellas, destaca la apertura y mecanismos que dinamizan las participaciones de la sociedad civil, incluso se denominaba como el “gobierno del poder popular”, también se promovió el acceso a la tierra aliviando al sector campesino con el decreto 18-2008, se impulsó la recuperación de la telefonía nacional, se logra un cambio tenue en la política energética, bajando los precios de los combustibles entre otros. El acercamiento a los gobiernos de corte socialdemócrata de América Latina, contribuyó al impulso de un gobierno un tanto diferente, en comparación a los gobiernos que se habían tenido antes.

Este plan de gobierno tiene como punta de lanza impulsar la **Democracia Participativa**, crear las condiciones habilitantes para que la ciudadanía pueda expresarse de manera libre, elevando sus demandas. Además, hay un compromiso explícito de generar las condiciones para crear un nuevo pacto social a través de la convocatoria amplia a una Asamblea Nacional Constituyente, incluyente y participativa.

Otro pilar fundamental es el **respeto irrestricto a los derechos humanos**, tan necesario ya que la política de Estado en los últimos 12 años fue todo lo contrario, de tal manera que fue necesario que la comunidad internacional acompañara al pueblo en la defensa de sus derechos frente al incumplimiento del deber del Estado de tutelar los derechos de la ciudadanía.

Luego tenemos el **3er eje**; el desafío por **transparentar la administración pública**, combatiendo la corrupción de frente sin reparos, para ello se ha planteado la necesidad de instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), de manera que la mora judicial contra delitos cometidos en la administración pública sea judicializados y se pueda recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.

El 4to eje se refiere a la apuesta por la inclusión social, enfocándose en facilitar el acceso a la salud, educación, seguridad y migración.

El 5to eje, “Género: nada sobre nosotras, sin nosotras”, recoge la propuesta de las organizaciones de mujeres y feministas que convergen en la Plataforma 25 de noviembre:

Introducir la perspectiva de equidad de género mediante la participación de verdad paritaria en todo proceso político.

Aumentar el presupuesto para asegurar el abastecimiento de métodos de planificación familiar para las mujeres en los centros de salud y educativos.

Facilitar la distribución, venta y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas.

Despenalizar el aborto por tres causales: 1) en caso de violación, 2) en caso de que la vida de la madre corra riesgo y 3) malformaciones fetales.

Aprobar e implementar en todos los niveles educativos, la educación sexual integral que en primer lugar enseñe respeto para el otro.

Impulsar la reactivación económica y social mediante una estrategia de inserción y participación efectiva y beneficiosa de la mujer en la economía del país, que incluya el reconocimiento de todo tiempo laborado.

Crear refugios de mujeres y niños víctimas/sobrevivientes de violencia.

Impulsar proyectos agroecológicos productivos en las comunidades, con miras a construir una alternativa de ingreso para las mujeres.

Establecer un centro de atención integral especializado para mujeres migrantes que impulse la reinserción social para las mujeres migrantes retornadas.

El 6to eje, “Modelo económico alternativo: crecimiento y desarrollo económico, pan para todos y todas”

contempla tres sectores importantes: el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria, que invoca a recuperar la cultura ancestral centrada en la agroecología que lleve a la ciudadanía a decidir sobre su alimentación, esperando se desestime la apertura a los agrotóxicos y los organismos modificados genéticamente; la protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal, el desarrollo industrial y el turismo.

El 7mo eje se refiere al presupuesto general de la república, la política fiscal y la inversión pública.

Los demás ejes tienen que ver con la política de relaciones exteriores del país, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, transitar a un Estado abierto y digital, política para el adulto mayor, sector discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas, población LGTBIQ+. (Plan de Gobierno, 2022)

El enfoque de género, lamentablemente no fue considerado en ejes priorizados en el plan. Al revisar cada uno de los ejes y como se plantea su desarrollo, no define cómo se logrará la inclusión de las mujeres en el abordaje de cada uno de los ejes estratégicos de desarrollo. Suponen que al integrar las demandas desde la agenda política de las mujeres y feministas, el enfoque de género está implícito, pero eso no es así, debe haber una política que garantice la transversalización del enfoque de género en cada una de las dependencias, o al menos señalar una estrategia que refleje los vasos vinculantes con el eje de Género.

7.2 Los diálogos y los vasos vinculantes entre organizaciones de mujeres y feministas y el nuevo gobierno

Las organizaciones de mujeres y feministas han dialogado con Xiomara Castro desde que se postuló como candidata la primera vez, en el año 2013. Las esperanzas de cambio para la vida de las mujeres se discutieron entre la candidata y más de una veintena de lideresas de todas las regiones del país. Las demandas de los distintos sectores fueron escuchadas por la candidata en ese entonces, lamentablemente los resultados de las elecciones seriamente cuestionados de fraude, no le permitieron hacerse con el triunfo.

Tuvieron que pasar ocho años para volver a intentar su cometido, postulándose en 2021 como candidata a la presidencia nuevamente, la Plataforma 25 de noviembre que aglutina organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, logró concertar una cita con la candidata para presentar la agenda política de las mujeres y feministas, un diálogo productivo que resultó en un pacto firmado por la coordinación de la Plataforma y la entonces candidata a la presidencia. (CEM-H, 2021)

El pacto, firmado entre las partes el 19 de agosto de 2021, empieza destacando, “LIBRE, partido político de izquierda, socialista, democrático, antiimperialista, feminista, antipatriarcal, revolucionario e incluyente, que plantea que uno de sus objetivos es ‘Garantizar la equidad e igualdad de género, así como el respeto a la diversidad sexual, desarraigando la cultura patriarcal en todos los ámbitos de la sociedad,’ coherente con sus principios acude a realizar esta alianza con las organizaciones de mujeres y feministas.” Plantea que el estado hondureño tiene una deuda histórica con respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Incluye puntos centrales de la agenda feminista, entre ellos: el fortalecimiento institucional de un estado con perspectiva de género, comprometido a la erradicación de las violencias contra las mujeres, políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, erradicar la feminización de

la pobreza, proporcionando a las mujeres “las condiciones para acceder a la tierra, al crédito y a la tecnología que les permitan alcanzar la autonomía económica; educación no sexista, defensa de pueblos originarios y grupos étnicos, derogación de las Zonas Económicas de Desarrollo (ZEDES); presupuesto con perspectiva de género y ratificación e implementación de los convenios internacionales de derechos de las mujeres.

Después de las elecciones con el triunfo rotundo de Xiomara Castro, las mujeres se auto convocan y se organiza la Mesa Nacional de Mujeres con participación de mujeres que venían de organizaciones comunitarias, redes de mujeres contra la violencia, organizaciones no gubernamentales. Se inicia el trabajo de construcción de propuestas para presentarlas a la Presidenta, cada sector prepara sus propuestas, se nombran dos enlaces que comunicarán a su vez a los encargados de movimientos sociales de Honduras, y se presentaron alrededor de 40 propuestas.

8. EL ENTORNO INTERNACIONAL

Esta sección analiza el papel histórico y actual del gobierno de Estados Unidos en la política hondureña. Asimismo, resalta el aporte de la solidaridad internacional que ha sido fundamental para concertar alianzas nacionales y transnacionales, sobre los problemas de la autodeterminación de los pueblos de la región, fortalecimiento de la soberanía ante la imposición de la política exterior hegemónica y de cruzar puentes para exigir justicia social de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las élites económicas y políticas de las defensoras de los bienes naturales y de los derechos humanos de las mujeres.

8.1 El papel del gobierno de los Estados Unidos

Como se destaca arriba, desde el análisis de poder, el nuevo gobierno de Xiomara Castro y la agenda de las mujeres organizadas enfrentan serios obstáculos, a pesar del triunfo en las elecciones de 2021. Entre ellos, se han mencionado las fuerzas de la oposición (Partido Liberal y Partido Nacional) en el Congreso, los poderes ocultos incluyendo los medios, la iglesia y una parte sustancial del empresariado y los poderes invisibles que intentan generar miedo con discursos atacando a la presidenta por comunista, feminista y factor de destabilización en el país

Otro poder fundamental en la ecuación es el gobierno de los Estados Unidos.

El papel de los Estados Unidos ha sido determinante en la historia política de Honduras. Después de establecer la Doctrina de Monroe en 1823 que declara el continente americano del dominio de los Estados Unidos para sacar a los poderes e intereses de los países colonialistas europeos, Honduras tuvo varios roles en la geopolítica del país hegemónico: generador de ingresos para sus transnacionales, sobre todo por el monocultivo en la primera ola del extractivismo (dándole el apodo de “república bananera” a principios del siglo XX); base de operaciones contra la izquierda regional

en la guerra fría; y fuente de mano de obra barata y vulnerada para la producción de empresas transnacionales, en Honduras en la industria de la maquila y en Estados Unidos como migrantes indocumentados, al generar condiciones que forzarán la migración masiva.

En años recientes, ha habido dos momentos clave en que el gobierno estadounidense cambió el curso de la historia hondureña, abiertamente violando los principios de la autodeterminación y la soberanía nacional: el golpe de estado en 2009 y las elecciones presidenciales de 2017. El gobierno de EEUU tenía conocimiento previo del golpe de estado y la expulsión a fuerza del presidente constitucional Manuel Zelaya. (CEPR, 2017) El avión en que secuestraron al presidente hizo una escala en la base de Soto Cano, compartido con las fuerzas armadas estadounidenses desde principios de los 80 en el marco de las guerras contrainsurgentes. El gobierno de Barack Obama condenó el golpe en público y en foros diplomáticos, mientras tras bambalinas la secretaria de estado Hillary Clinton maniobró para evitar el regreso de Zelaya al país y a la presidencia y, por otro lado, organizar elecciones espurias bajo el régimen golpista. Este acto debilitó a la resistencia y alargó la ilegalidad en el país, manteniendo en el poder una élite política fiel a EEUU y los intereses de las corporaciones transnacionales, y a la vez profundamente corrupto, antidemocrático y patriarcal.

El segundo momento clave fueron las elecciones presidenciales de 2017. En este año el tribunal electoral dio el triunfo a Juan Orlando Hernández en su intento inconstitucional de reelección. Las elecciones fueron tan sucias que hasta la OEA emitió un comunicado afirmando “la OEA no puede dar certeza respecto al resultado de las elecciones celebradas el 26 de noviembre” porque “el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad.”

Sin embargo, la encargada de la embajada de EEUU en el país, Heide Fulton, acompañó al presidente del Tribunal Supremo Electoral al anunciar los resultados fraudulentos y días después el gobierno estadounidense felicitó a JOH. Muchos analistas han notado que este aval por parte del gobierno estadounidense fue fundamental para consolidar el poder del JOH a pesar de las protestas masivas en contra del fraude.

Al llegar al poder en el 2017, el gobierno de Donald Trump se caracterizó por su política anti-migrante, a la vez sosteniendo los intereses militares, políticos y económicos de las elites coludidas estadounidenses-hondureños que obligaban a la gente migrar. En estos años, se profundizaron las condiciones de violencia, impunidad, despojo, desplazamiento y la falta de oportunidades económicas en Honduras, mientras las políticas de exclusión, hostigamiento y criminalización de personas migrantes se intensificaron en EEUU y México. El gobierno de Trump logró que el gobierno de Honduras firmara un acuerdo de “tercer país seguro”, llamado “Acuerdo de Cooperación de Asilo” que requería que las personas que pasaban por Honduras buscando asilo en

Estados Unidos solicitaran el asilo en Honduras. El Salvador y Guatemala también firmaron este tipo de acuerdos, a pesar de que ninguno de estos países estaba en condiciones para garantizar la seguridad a las personas migrantes con necesidades de protección, y en violación de sus derechos y de la soberanía de los países centroamericanos.

Con la elección de Joseph Biden en 2021 se suspendió el acuerdo, pero muchas de las mismas políticas de exclusión de migrantes han seguido. También, como se describe a continuación, se ha mantenido la política injerencista que ha caracterizado el actuar de EEUU en la región.

El contexto de la dependencia

La dependencia económica de Honduras a EEUU presenta una situación difícil para el nuevo gobierno. Según cifras del gobierno EEUU, el comercio bilateral fue de \$8.1 millones en 2020, con un superávit a favor de EEUU. El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y el DR que desde el 2005 rige la relación comercial entre EEUU y la región es un factor limitante para el desarrollo de políticas de desarrollo nacional, como se ha visto con las amenazas de meter demandas contra medidas tan necesarias como la terminación de las ZEDEs, la reforma energética y la moratoria a la minería de cielo abierto. Ya políticos en EEUU han advertido que podrían meter demandas bajo CAFTA si las reformas disminuyan las ganancias de las trasnacionales y la Representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, marcó una línea dura al afirmar la necesidad de fortalecer, no flexibilizar, el CAFTA solo unas semanas antes de las elecciones hondureñas. Los tribunales extranacionales que se crearon para ser los árbitros de disputas bajo el tratado tienen un fuerte sesgo a favor de los intereses de las empresas trasnacionales.

Por otro lado, la ayuda bilateral, regional y humanitaria desde el Departamento de Estado fue \$164.7 millón al año en promedio (2019-2020), sin contar la asistencia para los huracanes y la respuesta a la COVID19. El Departamento de Estado define cinco pilares de su política en Honduras: Abordar la inseguridad económica y la desigualdad; Combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el estado de derecho; Promoción del respeto a los derechos humanos, derechos laborales y libertad de prensa; Combatir y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de tráfico y otras organizaciones criminales organizadas; Combatir la violencia sexual, de género y doméstica. El combate al crimen organizado desde Estados Unidos se centra en un modelo militarizado dirigido por el Pentágono que presenta riesgos para la seguridad humana y la soberanía del país. El ejemplo emblemático, pero no único, es la masacre de cuatro indígenas por parte de la DEA en Ahuás y el encubrimiento de los hechos hace 10 años, el 11 de mayo de 2012.

En el tema económico, el enfoque discursivo del gobierno de Biden en la desigualdad es una buena señal, sin embargo, los programas concretos que propone siguen centrados en la inversión del sector privado en megaproyectos trasnacionales que generan conflictos y violaciones de derechos,

y en el extractivismo, poniendo en grave riesgo las vidas y el trabajo de las defensoras de tierra y territorio en país.

Queda por verse si el gobierno de Biden seguirá la política injerencista de Estados Unidos en Honduras. En lugar de especular sobre sus intenciones, es preciso analizar sus acciones y sus intereses. Se ha mostrado mucho interés en lo que pasa actualmente en Honduras, primero porque Honduras forma parte del Plan Biden para Centroamérica, lo cual contempla una inversión de 1 mil millones al año para 3 años, aunque el congreso ha aprobado una cantidad menor. En este contexto, la actividad diplomática ha sido relativamente intenso, con la visita de Emily Mendrala, de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos el 9 de febrero, de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, en diciembre y de la Vicepresidenta Kamala Harris para la toma de posesión de Xiomara Castro. En esta última visita, la vicepresidenta estadounidense se reunió con la nueva presidenta para tratar los temas centrales de la relación bilateral: migración, economía, corrupción y seguridad, sobre todo el combate al narcotráfico.

Luego, el canciller hondureño Enrique Reina viajó el 25 de febrero a Estados Unidos para hablar sobre los mismos temas. No se sabe qué tipo de acuerdos o pactos resultaron de estas visitas. Una señal que indica un preocupante afán de meterse en la política interna es el tweet de la nueva embajadora de EEUU en el país Laura Dogu el 3 de mayo, en respuesta al proyecto del gobierno de Xiomara Castro de revisión de contratos con empresarios de la electricidad en Honduras: Escribió: “Estamos analizando la propuesta energética y coo escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora.” Desde luego, el gobierno hondureño no había pedido su opinión sobre la necesidad evidente de revisar contratos hechos en el periodo del viejo régimen. El canciller Enrique Reina no tardó en responder: “Sra. Embajadora... nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos.”

En la coyuntura actual de la campaña, elección y gobierno de Xiomara Castro no es fácil analizar la estrategia de los EEUU, porque ha transcurrido poco tiempo para saber cómo va a relacionarse con el gobierno de LIBRE, (y como va a presionar al nuevo gobierno para promover sus intereses) y porque las declaraciones formales no dan un cuadro completo de la estrategia que hay detrás. Además, parece ser que existen diferencias al interior del gabinete y el congreso en torno a cómo manejar la relación y la política de EEUU hacia el país.

Los indicadores señalan que el gobierno de Biden no se opuso a la victoria de un gobierno de centro izquierda en Honduras, como ha hecho en otras ocasiones en América Latina, y que tomó la decisión antes de las elecciones de abandonar al Partido Nacional y el círculo de JOH que había apoyado. Esta decisión resultó obvia en por lo menos dos ocasiones. La primera fue: la decisión de

Kamala Harris de no visitar a Honduras en su primera gira a la región para tratar el tema de las causas de la migración en junio de 2021, a pesar de que Honduras es el principal país centroamericano de origen para migrantes a EEUU. En el marco de su campaña contra la corrupción en la región, no quería salir en la foto con JOH, señalado como cómplice en juicios por narcotráfico en Nueva York de su hermano y otros hondureños, y además acusado del saqueo del seguro social y otros casos en Honduras. Es muy probable que desde entonces había hecho el cálculo que el grupo de JOH ya no servía como aliado efectivo para el gran plan de Biden para Centroamérica, debido a su falta de credibilidad y los problemas de gobernabilidad que se generaría en el escenario de mantenerse en el poder por medio de otro fraude.

Otra señal inequívoca fue la visita de Brian Nichols, el subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental el 21-23 de noviembre 2021, al hacer una llamada por “elecciones libres y justas”, así advirtiéndole que esta vez el gobierno de EEUU no aceptará un fraude. Nichols sustenta un puesto clave en la política hacia la región, hay que recordar que el operador de la maniobra para ir a elecciones sin volver antes al orden constitucional después del golpe de 2009 fue precisamente el entonces subsecretario de estado para asuntos del hemisferio, Thomas Shannon.

Aún se encuentra en la fase de definiciones y lineamientos de la política estadounidense hacia el país y la región. El gobierno de EEUU define en gran parte el margen de maniobra que tendrá el gobierno de Xiomara Castro para hacer las reformas estructurales que prometió en su campaña y que exigen los movimientos sociales. Desde luego, la extradición de JOH no representa por sí solo un compromiso por parte del gobierno de EEUU con una transición democrática en el país, y las campañas de combate a la corrupción siempre han tenido un sesgo político, según los intereses económicos y geopolíticos de EEUU. El Plan Biden de desarrollo para el país contempla el continuismo de las políticas de injerencia militar y la promoción de la inversión en megaproyectos extractivistas, sin mayores cambios.

Existen varios puntos de fricción inminentes en la relación. El gobierno de Biden no se ha pronunciado sobre las derogaciones de las ZEDE. Según reportajes locales, el congresista Chip Roy quien representa los intereses de inversionistas tejanos, advirtió que la medida podría ser una violación del CAFTA. Evidentemente, existen fuerzas dentro del gobierno EEUU y apoyadas por poderosos intereses económicos en contra de cualquier intento de dismantelar el esquema de privatización a la ultranza del gobierno anterior y devolver en parte el manejo de los recursos naturales a las comunidades.

En materia de seguridad, la comitiva del 24 de febrero de la General Laura Richardson, comandante de SOUTHCOM, marcó la pauta de lo que se sabe hasta ahora. Según reportajes, discutieron la necesidad de fortalecer la cooperación en seguridad contra riesgos. Su visita a Soto Cano con La Fuerza en Conjunto Bravo fue un mensaje claro, “aquí estamos y no nos vamos”. El Pentágono tie-

ne un peso significativo en la política de EEUU hacia Honduras, reflejado en el hecho de que la mayor parte de la ayuda exterior al país es en materia de seguridad hasta donde se puede medir, en el marco de la guerra contra las drogas y de la contención de flujos migratorios. La fuerte presencia del Pentágono en el país, y la falta de transparencia respecto a sus designios y sus operaciones, es un desafío para el nuevo gobierno. Como se posicionan las Fuerzas Armadas, tanto en Honduras como su aliado histórico en el Comando Sur de EEUU, sigue siendo un incógnito que tendrá mucha influencia en la correlación de fuerzas para el cambio social que tanto necesita el país. Además, están los programas de “promoción a la democracia” como el Fondo para la Democracia (NED) que financian proyectos que promuevan los intereses de los EEUU y el capitalismo globalizado dentro del país.

Otros posibles puntos de fricción son el reconocimiento del gobierno de Venezuela por parte de la nueva presidenta con la declaración digna de “Tenemos una visión de respeto y acercamiento hacia Latinoamérica, Suramérica y el Caribe bajo el principio de no intervención en asuntos internos, respetando su soberanía y buscando la mejor relación con esas naciones que son amigas y hermanas”, en el contexto de la política de mano dura contra Venezuela de Biden. También existen fuertes y creíbles rumores de que el gobierno de Biden se opone a cualquier intento de ir hacia una asamblea constituyente en el país. El plan para la diplomacia en el nuevo gobierno hondureño apunta hacía una reorientación de la política exterior, sin mencionar explícitamente a los Estados Unidos, con la crítica al imperialismo, la no exclusión de China, su compromiso a promover la integración sur-sur en América Latina y la cooperación “orientada a atender las necesidades y prioridades nacionales.”

8.2 Otro elemento del poder popular: La solidaridad internacional

La solidaridad internacional ha sido fundamental para la lucha por la democracia, justicia y bienestar en Honduras. En la década de los ochenta, cuando el país fue utilizado para los fines geopolíticos de las guerras contrainsurgentes en la región, se desarrollaron conocimiento mutuo y lazos solidarios, en el contexto de los movimientos contra las guerras sucias y para retirar el apoyo a los escuadrones de la muerte en El Salvador, contra la guerra contrarrevolucionara en Nicaragua y para detener el genocidio en Guatemala, sobre todo en EEUU, pero también en Europa y otras partes del mundo. Aunque no se construyeron las mismas redes en el caso de Honduras, también creció la solidaridad con organizaciones de EU que buscaban incidir en la política exterior de su país en la región.

Dos momentos importantes que contribuyeron a un aumento notable en la solidaridad internacional con Honduras fueron el golpe de estado en 2009 y el asesinato de la conocida defensora y tierra y territorio feminista e internacionalista, Berta Cáceres en 2016. En el primero, las redes que trabajan la solidaridad con Centro y Latinoamérica en EEUU y Europa se movilizaron para denunciar el gol-

pe militar y apoyar a la resistencia. Fomentaron relaciones directas con organizaciones sociales en Honduras por primera vez o construyeron lazos más estrechos, monitorean y difundieron la situación día por día, presionaban a sus gobiernos a denunciar y cortar apoyo al régimen golpista e incidieron en las políticas de cooperación internacional para aislar al gobierno ilegítimo. Organizaciones feministas de todo el mundo participaron en esta época, inspiradas por las Feministas en Resistencia hondureñas y su forma de combinar la lucha por la democracia en crisis con la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres, sin relegar este último en tiempos de crisis política y social.

Sus esfuerzos tuvieron resultados mixtos, sin embargo, el conocimiento del país, muchos de los contactos, las amistades, y los compromisos que se establecieron en esta crisis en muchos perduraron. En los subsecuentes años, seguían las delegaciones. Los esfuerzos legislativos, diplomáticos y en el área de los derechos humanos siguen siendo un factor hoy en día frente a los retos de gobernar y refundar el país en condiciones difíciles.

El asesinato de Berta Cáceres, dirigente social reconocida a nivel internacional y lideresa del pueblo lenca que luchaba contra un proyecto hidroeléctrico transnacional, volvió a movilizar estas redes y extendió la solidaridad internacional con el pueblo hondureño entre otras redes. Fue el resultado de la gran indignación y rabia que provocó el crimen, pero también fruto de años de trabajo constante por parte de Berta de unir las redes internacionales en temas como el ambientalismo, el antimilitarismo y antirracismo y la violencia contra las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, y la defensa de la tierra y el territorio.

La comunidad internacional movilizó alrededor de la demanda de Justicia para Berta, promovían resoluciones y leyes en sus congresos, organizaron delegaciones a Honduras, denunciaron e investigaron. Propuestas como la Ley Berta Cáceres en los EEUU vinculaban la necesidad de condicionar la ayuda exterior a Honduras al respeto de los derechos humanos para no seguir sosteniendo el gobierno represivo y autoritario. La visibilidad de la crisis política y social en Honduras aumentó.

Otro momento importante de solidaridad internacional fue en torno al proceso electoral, en que participaron organizaciones y personas solidarias en la observación electoral, cobertura mediática independiente, capacitación e intercambio de experiencias.

En una serie de entrevistas, mujeres lideresas en distintos movimientos sociales y políticos hablaron de lo que significa la solidaridad internacional para Honduras en la coyuntura actual. Lucia Vijil de CESPAD, que coordinó la observación electoral nacional e internacional más amplia, destaca la importancia de la solidaridad internacional en las tareas pendientes de la etapa post electoral, de gobernar “en compartir experiencias, en intercambiar procesos, en hablar de los métodos, en hablar de los caminos, de las salidas, de las oportunidades. Este diálogo es entre lo más valioso que puede

haber como apoyo de la comunidad internacional”.

Andrea Huila de LIBRE, señala que hace falta una solidaridad basada en luchas compartidas, para compartir “las diferentes formas en que estamos enfrentando el poder económico desde diferentes espacios, como estamos enfrentando a este mundo globalizado y los males que ha traído. De estos encuentros pueden salir alternativas, que fortalezcan la soberanía... y las soberanías del sur global en su conjunto.”

Bertha Zúñiga Cáceres afirma el papel de la solidaridad en denunciar, en exigir transparencia, en visibilizar las luchas. “la comunidad internacional debe estar pendiente, dijo: Tenemos que enlazarnos como pueblos.” María Elena Méndez señala la base de la solidaridad como un compromiso ético el proceso de hacer puentes, mientras que Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres destaca tarea de seguir presionando a los gobiernos del mundo, especialmente EEUU, de denunciar lo que pasa y dirigir la cooperación hacia la necesidad de fortalecer el nuevo gobierno, que ya enfrenta ataques desde las fuerzas política, medios de comunicación corporativos, élites empresariales, las cúpulas de las iglesias y de los partidos políticos tradicionales derrotadas en las urnas. Advirtió la importancia de cambiar la política de canalizar ayuda a las fuerzas armadas y grupos militares que fue un pilar del régimen pasado.

Delmy Martínez enfatiza que el pueblo hondureño no quiere intervencionismo, y que desde EEUU y el resto de América Latina la solidaridad tiene el papel de mantener la presión para poder cumplir con las promesas de campaña acordadas con organización sociales y Divina Alvarenga habla de retomar el trabajo del Laboratorio de políticas Públicas de desarrollar propuestas con la participación de la ciudadanía para proteger a las mujeres a nivel local, elaborar presupuestos con perspectiva de género, educar para la igualdad y desarrollar las capacidades de las mujeres para dinamizar el desarrollo del país. Muchos países han avanzado en estos temas y pueden compartir sus aprendizajes.

9. LAS OPORTUNIDADES PARA TRANSFORMAR EL PODER Y CAMINAR HACIA LA IGUALDAD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES

RESUMEN

Las oportunidades que se visualizan en este ensayo toman en cuenta los cambios sociopolíticos sucedidos en el país con la elección de la primera presidente mujer, Xiomara Castro de Zelaya, quien en su plan de gobierno bicentenario ha incorporado las propuestas y demandas planteadas en la agenda política del movimiento de mujeres y feministas, y el marco de las complejidades y dinámicas de los procesos socio políticos, que están impulsando los movimientos sociales en América Latina, para democratizar los espacios de poder político, fortalecer las democracias me-

diante la defensa de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y garantizar igualdad de oportunidades de las mujeres en relación con los hombres en la toma de decisiones.

9.1. Oportunidades de incidencia en el Ejecutivo

El ejercicio pleno de la participación política es responsabilidad del Estado y la sociedad hondureño. En el marco de políticas públicas a nivel del ejecutivo la Secretaría de Estado en Asuntos de la Mujer en la elaboración del tercer Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras se presenta la oportunidad de retomar las acciones estratégicas establecidas en el segundo Plan que no fueron cumplidas e impulsar políticas públicas con acciones afirmativas que garanticen el cumplimiento de la paridad del 50% de las mujeres en los cargos de elección popular mediante asesorías, monitoreo y seguimiento para que los órganos electorales cumplan con la normativa establecida en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en la reforma que estipula el paso a la paridad 50% mujeres y 50% hombres como mecanismo de alternancia en los artículos 72-75 del capítulo tres.

La Secretaría de Estado en Asuntos de la Mujer con las funciones asignadas en los cambios de la estructura administrativa y política del Estado, mediante la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República el 7 de abril del 2022, se legitima el rango de Secretaría de Estado. Este es un logro trascendental al reconocer el estatus político de los asuntos públicos que enfrentamos las mujeres hondureñas, para que la Ministra de esta Secretaría participe en igualdad de condiciones en las decisiones tomadas en el Consejo de Ministro a nivel del Ejecutivo. Este estatus permitirá impulsar políticas públicas desde la perspectiva de género para transversalizar acciones estratégicas con las demás Secretarías de Estado, que garanticen políticas educativas encaminadas a la participación política de las niñas y adolescentes en los gobiernos escolares, asesorar a los partidos políticos en la elaboración de protocolos para la atención de los casos de violencia política que enfrentan las mujeres que se postulan a cargos de elección popular, impulsar y asesorar a los partidos políticos en la elaboración de un código de ética, para prevenir y sancionar la violencia política de las mujeres. Y al Tribunal de Justicia Electoral, proponer normas jurídicas para sancionar los actos de violencia política que comentan los líderes políticos a las mujeres candidatas en los cargos de elección popular.

Al nivel del Congreso Nacional de la República, se presenta la oportunidad de establecer alianzas con el Foro de Mujeres Políticas, para hacer propuestas de acciones afirmativas en la nueva Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, pendiente de establecer consensos entre los partidos políticos que permita la aprobación en este órgano de poder del Estado.

Para ello, se debe tomar en cuenta los obstáculos técnicos, políticos y de financiamiento, que enfrentan las mujeres para ser elegibles en los cargos de elección popular garantizando la paridad del 50%.

Las organizaciones de mujeres y feministas, tienen una oportunidad histórica para continuar estableciendo alianzas estratégicas con actores políticos con poder de decisión a nivel de ejecutivo y legislativo, para impulsar reformas de políticas públicas y marcos jurídicos que incorporen las demandas y propuestas que contiene la agenda política de las mujeres, garantizando la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres como: la aprobación de la Ley en contra del Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, presentada por la Diputada Doris Gutiérrez, que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional, y demandar la aplicación de la paridad con alternancia consignada en la Ley Electoral de las Organizaciones Políticas, y demás normativa establecida en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y las Convenciones Mundiales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Asimismo, fortalecer el Foro de Mujeres Políticas como espacio de incidencia y propuesta a nivel del Congreso Nacional de la República y continuar con los espacios de debate a nivel nacional e internacional para establecer alianzas de solidaridad, recoger los avances, aprendizajes e iniciativas de políticas públicas y leyes que han logrado los movimientos feministas en América Latina.

En la nueva coyuntura política, las organizaciones de mujeres y feministas también pueden seguir generando espacios de diálogo con funcionarios públicos. En principio, se encuentran frente a un contexto favorable para interlocutor con los funcionarios de gobierno actual, son varias las feministas que ahora están al frente de varias de las instituciones, con quienes se puede dialogar y además pueden contribuir en el acercamiento a otros funcionarios. Esta oportunidad de incidencia real y efectiva con el gobierno presenta un nuevo escenario para las organizaciones y una buena coyuntura para avanzar sus demandas sociales, políticas y económicas.

9.2 Coordinación de iniciativas sector social y público

Una de las limitantes en el periodo de gobierno anterior era su corte dictatorial violatorio de los derechos humanos. Como se ha explicado, esa naturaleza repelía las posibilidades de coordinación de acciones, actividades, proyecto etc., debido al riesgo de ser señaladas de estar en sintonía con régimen dictatorial, y a la cerrazón del gobierno. Ahora esas preocupaciones no existen de la misma manera, por tanto, se pueden encontrar avenidas que conlleven a fortalecer el trabajo del sector social.

9.3 Impulsar reformas y cambios en el ámbito legislativo

El 08 de marzo, las organizaciones de mujeres y feministas tuvieron la primera reunión directamente con la Presidenta, para solicitar su apoyo o acuerpamiento para impulsar un paquete

de leyes que responden a mejorar las condiciones de las mujeres en Honduras, entre ellas la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, la Ley para las Casas Refugio, entre otras. Asimismo, se solicitó la derogación del decreto que prohíbe el acceso y uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE).

Otra área de reformas necesarias tiene son las leyes de seguridad que han tenido un impacto nefasto en la vida de las mujeres, siendo blancos de represión en su cuerpo y en sus movimientos. La militarización del país ha servido como un instrumento patriarcal de control social; en el **Plan de Gobierno 2022-2026**, el punto 4.4, se compromete a derogar la Ley de Defensa y Seguridad Nacional que le dio a JOH el control absoluto de los entes de seguridad y también se comprometió a limitar las funciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y desmilitarizar la sociedad.

Otra oportunidad para los pueblos y especialmente las mujeres en la defensa de tierra y territorios es la voluntad manifiesta de la Presidenta en derogar leyes que impulsan el extractivismo como la Ley de las zedes.

10. Bibliografía

- Barahona, M. (2018). Elites, redes de poder y régimen político en Honduras. Honduras: Editorial Guaymuras.
- Centro de Estudio para la Democracia CESPAD, T. (2015). Rediseño del Estado en Honduras: ¿avances o retrocesos en la democratización Tegucigalpa, Honduras.
- Constitucionales, C. d. (2011). Encuentro Regional desafíos a liderazgos de las mujeres en Centro América. Managua, Nicaragua: Helios C.A..
- Democracia, C. d. (2021). Informe de Monitoreo Institucionalidad Electoral. Así avanza las elecciones en Honduras: Un análisis del proceso. Honduras.
- Fellez, C. N. (2011). Desafíos al liderazgo de las mujeres en Centroamérica. Managua, Nicaragua: Nina Lucía Monje Navarro.
- Gerencia. (2015). ¿Es líder o caudillo? Revista Summa. Obtenido de <https://revistasumma.com/es-lider-o-caudillo/>
- Miller, Valerie, Lisa VeneKlasen, Molly Reilly, Cindy Clark, “Haciendo que el cambio sea una realidad: El poder”, JASS 2006 https://justassociates.org/wp-content/uploads/2020/08/mch3_spanish_final.pdf
- Montesdeoca, M. E. (2003). La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en Honduras: luces, sombras y desafíos. Tegucigalpa: Colección Desarrollo Humano Sostenible.
- Mundo, B. (9 de diciembre de 2017). La Alianza de Oposición de Honduras impugna el escrutinio de las elecciones presidenciales y pide un árbitro internacional. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42296539>
- Plan de gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 <https://www.libre.hn/plan-de-gobierno-de-xiomara-2022-2026>
- Políticos, P. (2013). COMPROMISO DE GARANTÍAS MÍNIMAS PARA LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA ELECTORAL. Tegucigalpa, Honduras.
- Stiftung, H. B. (2016). Re-conceptualización de la violencia en el Triángulo Norte, abordaje de la seguridad en los países del norte de Centroamérica desde una visión democrática. San Salvador, El Salvador: Talleres de Impresión, Asociación Equipo Maíz.

USAID, P. O. (2017). Violencia contra las mujeres en la política.
Honduras.

Villatoro, I. (2022). Entrevista a profundidad de la candidata a diputada del
Partido Libre . (L. M. Ordoñez, Entrevistador)

<http://www.cemh.org.hn/wp-content/uploads/2021/09/PACTO-DE-XIOMARA-CON-ORG-DE-MUJERES-FEMINISTAS-DE-HONDURAS.pdf>